

Colección:

**Tensión y complicidad entre desigualdades y
políticas sociales
Análisis interseccional del contexto cubano 2008-2018**

Desigualdades económicas e interseccionalidad

**Análisis del contexto
cubano 2008-2018**

Dayma Echevarría León



Colección

**Tensión y complicidad entre desigualdades y políticas sociales
Análisis interseccional del contexto cubano 2008-2018**

Desigualdades económicas e interseccionalidad

Análisis del contexto cubano 2008-2018

Dayma Echevarría León

Edición y corrección: *Ana Isabel Peñate Leiva y Anette Jiménez Marata*

Diseño interior, de cubierta y maquetación: *Anabel Falcón Peñate*

Imágenes de cubierta: *Reynaldo Jiménez Guethón y Archivos Centro de Estudios Sobre la Juventud*

© Dayma Echevarría León

© Sobre la presente edición,

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Programa-Cuba), 2020

Publicaciones Acuario, Centro Félix Varela, 2020

ISBN 978-959-7226-68-0

ISBN 978-959-7226-72-7

Contenido

Definición conceptual de las desigualdades económicas /5

Brechas de equidad identificadas /36

Propuesta de políticas según estudios /38

Referencias bibliográficas /41

De la autora /49

Definición conceptual de las desigualdades económicas

El tema de las desigualdades económicas resulta ampliamente debatido en la actualidad y forma parte activa de los estudios que realizan diferentes campos de investigación como Economía, Sociología, Psicología, Antropología, entre otras disciplinas. El análisis de esta problemática no solo es relevante para la ciencia, sino también forma parte de la agenda de diversos gobiernos, independientemente de su postura política.

Con frecuencia, el estudio sobre las desigualdades en general, y las económicas en particular, se ubica dentro de los estudios de bienestar, también con otros campos analíticos como exclusión, igualdad, pobreza, bienestar y condiciones de vida (Kessler, 2015). El enfoque que adopta el estudio de las desigualdades económicas se encuentra profundamente influido por la postura teórica, ideológica y metodológica que adoptan las personas que realizan la investigación. Por ello se pueden encontrar diferentes enfoques en este concepto, distintas perspectivas de análisis y diversos posicionamientos respecto a las alternativas de solución frente a una problemática de esta naturaleza.

No existe consenso en cuanto a la construcción de un concepto único que incluya todas las perspectivas de las desigualdades económicas. Sin embargo, este es uno de los conceptos que, en gran medida, se define por la metodología utilizada para su medición. Recursivamente, esta se relaciona con la perspectiva de análisis teórica del concepto, como se verá más adelante. El Manual de Oxford sobre desigualdades económicas señala que estas “(...) pueden ser concebidas como desigualdades con un efecto económico o un origen económico, siendo tanto una salida de los procesos económicos subyacentes como una entrada en estos procesos (...)”. (Salverda, Nolan & Smeeding, 2009, p.8), y estas deben analizarse desde una perspectiva de oportunidades y restricciones. Las desigualdades económicas no se circunscriben solo a áreas como el ingreso y la riqueza, sino que operan en las distintas oportunidades y desventajas que las personas enfrentan en su afán de construir sus ideales de vida.

Ámbitos como el acceso a la salud y a la educación son desencadenadores de desigualdades económicas. No solo tener acceso a esos derechos satisface la reducción de la desigualdad, pues la calidad de esos servicios de salud y educación también genera una serie de ventajas de unos sobre otros que provocan desigualdad. De ahí la importancia de la intervención de mecanismos

institucionales —el Estado como ente principal— y su relación con el mercado y las diferentes formas de propiedad. (Rutstein y Johnson, 2004).

Por lo tanto, la desigualdad económica no está atada solo a los ingresos que perciben individuos o familias. Según la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): “La desigualdad económica es la diferencia en cómo se distribuyen los activos, el bienestar o los ingresos entre la población (...)” (Galindo y Ríos, 2015, p.2), es decir, la dispersión que se verifica entre distribución de ingreso, consumo o cualquier otro indicador de bienestar.

Existen diferentes aproximaciones teóricas y metodológicas para abordar las desigualdades económicas. En la bibliografía revisada por lo general se utilizan diversas consideraciones relacionadas con la distribución de ingresos, de riqueza, de gastos y estructura de consumo, así como la desigualdad en el sistema tributario. A continuación, se hará referencia a cada una de ellas.

Una de las vías tradicionales y más recurrentes para estudiar las desigualdades económicas es la *desigualdad en la distribución de ingresos*. Implica el estudio de la concentración del ingreso —salarios, dividendos, rentas, intereses, ahorros, pensiones, transferencias— en diferentes grupos de personas u hogares. Por lo general, muestra el porcentaje de personas u hogares que se apropian de los ingresos totales.

La distribución de los ingresos ha sido estudiada bajo diferentes enfoques según la unidad de análisis: funcional, personal, espacial y sectorial (Rosales, 2008). La *distribución funcional* hace referencia a la distribución del ingreso entre los distintos factores productivos que participan de la actividad económica, típicamente tierra, trabajo y capital. La *distribución personal* tiene como unidad de análisis a las personas, ya sea individualmente o por hogares, y desglosa el ingreso nacional en salarios, ganancias y renta de recursos naturales en función de ellos. Este enfoque es el más utilizado en la actualidad, y la información proviene principalmente de las encuestas de hogares. Los datos, sin embargo, no son exactos. Entre los factores que limitan la veracidad de estas informaciones se encuentran: la subdeclaración de los ingresos por temor a dar a conocer las cifras reales de los ingresos que perciben, aun cuando las encuestas sean anónimas y su fin sea únicamente investigativo; temor a declarar ingresos no legales; inestabilidad o temporalidad de los ingresos que dificultan su cálculo en una unidad de tiempo (semana, mes, año), que los miembros del hogar no declaren todos sus ingresos al resto, entre otras causas (Rutstein y Johnson, 2004, p.2).

No obstante, la distribución personal resulta una importante fuente de información ya que no solo refleja datos económicos, sino también permite cruzar esta información con

características sociodemográficas de los individuos u hogares. Los datos relacionados con el ingreso pueden cruzarse con variables como sexo, raza, edad, nivel de educación, fuente de empleo, acceso a los servicios, territorio. Los resultados investigativos, si bien no son el reflejo exacto de la realidad, sí reflejan una aproximación bastante integral de ella, y sirven como base para la elaboración de políticas contra la desigualdad.

Rosales (2008, pp.20-21), enumera los factores determinantes de la distribución personal de los ingresos sobre la base de su tratamiento en la literatura sobre este tema:

- La herencia genética, de riqueza material y cultural, recibida de los padres y del entorno social.
- La capacidad y habilidades que los individuos pueden heredar o desarrollar, asociado a factores educacionales como la formación individual, el nivel cultural y educativo, la superación personal, etcétera.
- El transcurso del tiempo, que marca etapas diferenciadas a lo largo del ciclo vital, en cuanto a la percepción o no de determinados tipos de ingresos.
- Factores macroeconómicos: la inflación, el desempleo, el crecimiento económico, la política presupuestada del sector público, el tipo de cambio, etcétera.
- Factores demográficos: el tamaño del hogar, la estructura de la población por edades, el estado civil, la natalidad, la mortalidad y los fenómenos migratorios.
- Factores laborales y socioeconómicos: categoría ocupacional, estatus laboral (desempleado, inactivo, empleado), formas de propiedad, rama de actividad, tamaño del centro laboral, características del centro de trabajo, entre otros.
- Factores geográficos y de localización: tamaño de la localidad, variables por áreas, regiones y países.
- Factores internacionales: apertura comercial, integración en áreas económicas, influencia de países vecinos, política.
- Otros factores: diferentes características personales como sexo, raza, nacionalidad, religión; diferentes características de la vivienda como tenencia de vivienda, tipo de vivienda, entre otros.

Por su parte, la *distribución geográfica o espacial* busca medir la diferenciación de ingresos entre las personas según el espacio geográfico donde residen (a nivel de territorio, región, país) sin atender las diferencias al interior de cada nivel.

Por último, *la distribución sectorial* de los ingresos divide la economía en sectores (clásicamente agricultura, industria y servicios) y estudia la distribución de ingresos según cada sector productivo. La división de sectores estará en dependencia del tipo de investigación que se lleva a cabo.

Otra perspectiva para el estudio de las desigualdades económicas se encuentra en el estudio de la *desigualdad en la distribución de la riqueza*. En el *Handbook* de la Universidad de Oxford sobre desigualdades económicas (Salverda, Nolan & Smeeding, 2009, p.128), se expresa una definición de riqueza: “(...) el valor de los activos no humanos menos las deudas (...)”. Las fuentes de información para estos estudios provienen principalmente de encuestas de hogares, los impuestos sobre la riqueza y los impuestos al patrimonio. Al igual que para los ingresos, estas vías de obtención de datos presentan ventajas y limitaciones. Si bien a la hora de medir la riqueza no se abarcan todos los activos por un problema práctico, lo ideal sería que las mediciones cubrieran: efectivo, depósitos y otros activos líquidos; acciones y obligaciones, otros activos financieros; poseer casa propia y otros bienes raíces; y activos duraderos como antigüedades, arte, joyas, etcétera.

La riqueza puede resultar tanto de la acumulación a lo largo de toda la vida como en forma de herencia. Varias razones inducen a las personas a la acumulación de riqueza durante su vida, como la de guardar dinero suficiente para disfrutar de una vejez plena en la que los ingresos irremediamente remitirán y serán inferiores a las edades en que más ingresos se percibían; para satisfacer necesidades de salud o educación, propias o de los hijos, tales como asegurar el acceso de estos a una universidad; o simplemente como precaución frente a *shocks* que pudieran surgir en el futuro: crisis, enfermedad, etcétera.

“La necesidad de acumular a lo largo de la vida está afectada por determinadas políticas e instituciones clave en cualquier país, tales como vivienda, pensiones y salud (...)” (Salverda, Nolan & Smeeding, 2009, p.141).

En el caso de la herencia, la distribución es muy desigual. A nivel general en la sociedad, representa una mínima parte de la riqueza total de una persona a lo largo de su vida. Sin embargo, es en los sectores más pudientes donde la concentración de la herencia alcanza mayor importancia para hablar en términos de igualdad. Es por ello que los impuestos a los ricos constituyen una forma eficaz de lograr la redistribución a todo el conjunto de la sociedad.

Un factor determinante en la riqueza agregada, la desigualdad de riqueza y su tendencia en el tiempo es el demográfico. Los grupos demográficos determinan la configuración de la riqueza agregada de una sociedad: así, los jóvenes de entre 25 a 34 años poseen niveles de riqueza muy bajos, e incluso negativos, mientras que los grupos de adultos mayores de 55 a 64

representan el patrón contrario. Inversamente, los niveles de ingresos de los jóvenes superan por mucho al de los mayores.

Lamentablemente los estudios sobre las implicaciones de factores demográficos en la distribución de la riqueza no son tan abundantes como los relacionados al ingreso, y los existentes son, en su mayoría, investigaciones realizadas en países desarrollados, sobre todo miembros de la OCDE. Sin embargo, los cambios demográficos prueban consecuencias irrefutables en la desigualdad de riqueza, sobre todo desde una perspectiva histórica y de largo plazo.

De forma reciente ha crecido una línea de análisis que cuestiona la política fiscal, y *la desigualdad y efectividad de los sistemas tributarios* como sistemas de redistribución de la riqueza, al analizar hasta qué punto los impuestos que se aplican sobre ingresos personales y propiedades resultan una herramienta efectiva de redistribución de los ingresos. Además, se apunta con fuerza, que la concentración de riquezas genera un proceso de *secuestro de la democracia* pues quienes detentan el poder económico también ejercen el poder político (Oxfam, 2015).

La concentración del ingreso en una parte pequeña de la población tiene, sin lugar a dudas, consecuencias negativas que no solo implican desigualdades de tipo económico. Ello conduce a la formación de élites con gran poder económico, capaces de influir notablemente en las decisiones políticas de un país. La forma en que se distribuyen los ingresos en la cima de la pirámide de distribución, contribuye a la comprensión de lo que ocurre en su base. La alta concentración de los ingresos en una pequeña parte de la población estaría altamente correlacionada con la pobreza relativa.

Los estudios en países desarrollados de habla inglesa (como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda) demuestran que los ingresos de 1% y del 10% de la población más rica han crecido sostenidamente desde la década de los ´70. Para los países desarrollados de habla no inglesa (en cuestión, Francia, Alemania, Japón, Holanda, España, Suiza, Suecia) la tendencia es a la estabilidad (Salverda, Nolan & Smeeding, 2009).

Para el caso latinoamericano, remarca:

La desigualdad que nos impide acabar con la pobreza tiene profundas raíces en cada país. Ingresos, patrimonio y tierra, todo concentrado en pocas manos. Multimillonarios que se multiplican junto a su riqueza, y las personas comunes, que no logran ganar ni siquiera para pagar sus deudas. Un modelo económico que concentra riqueza. (...) Miles de millones de dólares que podrían ser utilizados para financiar políticas públicas, pero que salen de aquí y van a parar a paraísos fiscales (Oxfam, 2015, p.7).

La teoría marxista ha explicado y criticado esta tendencia a partir del fenómeno de concentración del ingreso, justificado por *la libre competencia* que ha dado paso al surgimiento de los monopolios y las empresas transnacionales, entre otros entes de poder.

La redistribución del ingreso desde el tope de la pirámide hasta la base es fundamental en el logro de la equidad. La herramienta a usar sería un sistema fiscal justo y equitativo, lo que requiere reformar los existentes.

Un informe del 2014 (Oxfam, 2014), señalaba que las causas del incremento de la desigualdad económica se relacionan con el fundamentalismo de mercado y el secuestro democrático por parte de las élites. En el 2015 aparecen otros informes de esta organización donde se explica que la concentración de los ingresos, la riqueza, la tierra y el patriarcado son los pilares de la concentración de la desigualdad (Oxfam, 2015). En el 2016, en otro estudio desarrollado sobre este criterio, los autores proponen estudiar los sistemas tributarios, la evasión y la elusión de impuestos como mecanismos de reproducción de la riqueza (Oxfam-CEPAL, 2016).

Otra de las formas de estudiar las desigualdades económicas se relaciona con el estudio de *la desigualdad en los gastos y la estructura del consumo*. Se basa por lo general en el mercado de créditos (pasado o a futuro) (Salverda, Nolan & Smeeding, 2009). Se utiliza este enfoque como un *proxy* de ingresos en el entendido de que los ingresos (Y) resultan de la sumatoria de los gastos de consumo (C), más los ahorros (S), más los impuestos (T) ($Y = C + S + T$), partiendo del supuesto de que la distribución de los hogares con el mismo nivel de ingresos tendrá una distribución similar de los ahorros. Aunque esta presunción no es verdadera, el gasto en consumo de los hogares es usado con frecuencia como un indicador *proxy* de ingresos (Rutstein y Johnson, 2004, p.3).

Este enfoque, además, tiene varias inconsistencias:

- Los gastos pueden tener una estructura diferente según los miembros del hogar, por ejemplo, bebidas alcohólicas, música, entre otros; sin embargo, la declaración de gastos se obtiene a partir de lo reportado por la persona que esté en el hogar en el momento de la entrevista, así que hay gastos de otros individuos que se pueden ignorar o no tener en cuenta.
- La mayoría de los estudios sobre gastos se realizan sobre una canasta básica de alimentos y servicios para calcular un índice de precios de consumo. Sin embargo, existe una lista más amplia de bienes que se debería incluir, que tiene períodos de pagos irregulares o más amplios como pueden ser vehículos, equipos electrodomésticos, regalos de cumpleaños, uniformes y textos escolares, pagos de escuela, entre otros.

- Otra de las limitaciones se relaciona con qué período de tiempo se va a analizar para el consumo ya que, en dependencia del tipo de bien o de servicio, son relevantes diferentes períodos: por ejemplo, las últimas 24 horas o los últimos siete días para el consumo de alimentos, los últimos 30 días para el pago de la electricidad o el teléfono, o la compra de ropa.
- Por lo general ignora la existencia de bienes duraderos, que superan el período de tiempo de análisis. Tampoco es sensible al cambio de precios y valores (Ruststein y Johnson, 2004, pp. 2-5).

Un problema común en los ingresos del hogar y los gastos de consumo es su volatilidad. Los ingresos pueden ser muy cambiables o estacionales y aleatorios principalmente en países subdesarrollados. Los hogares tratan de mantener un núcleo no discrecional de gastos de consumo en los períodos en los que disminuyen los ingresos. Sin embargo, el estatus socioeconómico de un hogar se mide mejor por gastos no discrecionales que será abordado más adelante a través del análisis de bienes no monetarios.

El estudio del consumo, pero con una variante más pertinente para analizar el bienestar en el mediano y largo plazo, también se ha realizado con el análisis en *la desigualdad de la tenencia de los bienes duraderos*. Un desafío de este enfoque metodológico estriba en la unidad de observación: bienes de propiedad individual o que existen en el hogar. Esta diversidad de opciones hace más difícil el análisis pues no se pueden sumar, se necesita una herramienta técnica para construir índices. El índice de bienestar económico basado en la posesión de bienes duraderos se puede calcular con la técnica del análisis de los componentes principales (ACP) polychorica¹, una técnica de reducción de la complejidad de datos (Ward, 2014). Si bien no se puede interpretar como una medida directa o absoluta de bienestar, resulta una medida relativa de bienestar, dentro de una misma clase y permite establecer comparaciones relativas. Como cualquier índice, la elección del peso de los componentes tiene una importancia crítica.

La mayoría de los estudios sobre la distribución de ingresos monetarios, ya sean entre países o al interior de una nación, se han basado en variables monetarias como ingresos o gastos. Sin embargo, analizar solo las variables monetarias tiene serios sesgos. Los ingresos monetarios formales de un hogar proceden principalmente de los salarios y de ingresos monetarios relacionados con el trabajo como las rentas y las ganancias. No obstante, muchos hogares obtienen otras formas de ingresos monetarios y no monetarios, como aquellos que provienen del mercado informal o “gris” así como del autoconsumo de productos primarios. Además, principalmente en países subdesarrollados, los ingresos personales monetarios tienen

¹ Es un tipo de correlación que se utiliza para variables dicotómicas (*dummies*) donde la correlación normal no se puede calcular.

una variación estacional importante mientras que los gastos de consumo tienden a ser menos importantes.

Otros estudios revisados, se basan en evidencia empírica sobre la *desigual distribución de bienes no monetarios*, de manera consistente con el enfoque de las capacidades de los hogares (Sen, 1999). Como las capacidades no pueden ser medidas de la forma tradicional, se utilizan variables que tratan de aproximarse a su significado para captar las dinámicas de la multidimensionalidad del bienestar, por ejemplo, la propiedad de activos, bienes duraderos y otras características de los hogares. En este sentido, el principal desafío se encuentra en la selección de los bienes a escoger: número de cuartos de la vivienda, materiales de construcción, acceso a agua potable, tipo de baño, entre otros.

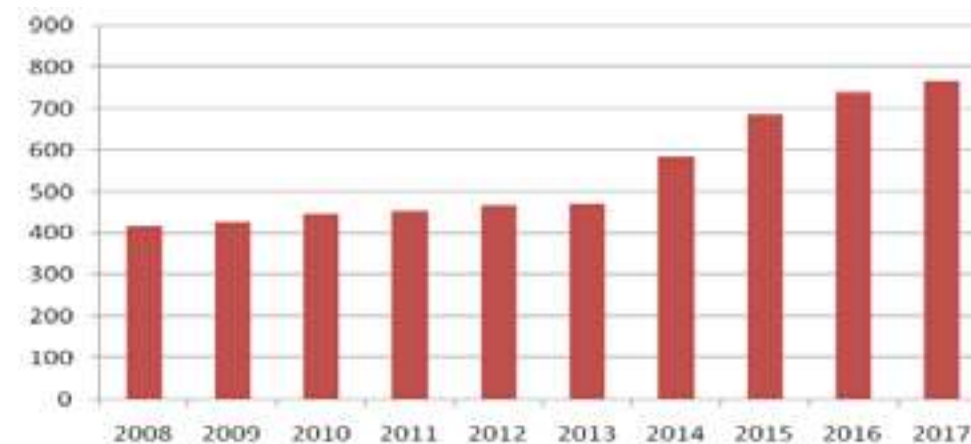
Desigualdades económicas: estadísticas y estudios en Cuba

En Cuba los estudios sobre desigualdades económicas no han sido muy frecuentes, en parte por falta de información oficial sobre indicadores económicos y sociales básicos del país que permitan elaborar estudios científicos. Por otra parte, debido a la complejidad que abarca esta clase de desigualdades y sus implicaciones político-ideológicas al tratar un tema como este, pues mantener las diferencias de ingresos entre las personas y evitar la concentración de la riqueza han sido objetivos de las políticas.

No existen estadísticas públicas disponibles sobre las desigualdades económicas. Como se comentará más adelante, el último dato sobre la concentración de ingresos medido por el Coeficiente de Gini es del 2002.

El comportamiento del salario medio nominal mensual, aunque no expresa con precisión las desigualdades de ingresos (pues, como se comentará más adelante, ha venido disminuyendo su peso dentro de los ingresos) resulta el indicador más cercano y público de las desigualdades económicas. Este ha tenido un comportamiento creciente en el período 2008-2017 como se observa en el siguiente gráfico:

Gráfico 1 Salario medio mensual en entidades estatales y mixtas²



Fuente: ONEI. Anuario Estadístico de Cuba. (varios años)

El análisis de la evolución de los salarios en términos nominales en el período muestra cambios positivos, que son reflejo de las modificaciones introducidas al sistema de pago por rendimiento. El salario medio en el período 2008-2017 experimentó una tasa de crecimiento de 84 puntos porcentuales; es decir, un incremento de 1,84 veces: en 2008 el salario medio era de 415 CUP y en 2017 la cifra alcanza los 767 CUP (ONEI, 2018).

Las principales diferencias salariales en los últimos años se verifican por provincias y por sectores de actividad económica. En 2017 las actividades económicas de mayores salarios promedio en el país fueron: industria azucarera (1236 CUP); Explotación de minas y canteras (1219 CUP); Intermediación financiera (1048 CUP); industrias manufactureras (1037 CUP); Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1027 CUP): todas las ramas con salarios medios por encima de los 1000 pesos cubanos. Los salarios más bajos se encuentran en el sector de “Otras actividades” de servicios comunales, de asociaciones y personales, con 532CUP. Se observa entonces un diferencial entre los mayores salarios medios mensuales y los menores de 2,3 veces³.

Lo anterior se encuentra asociado a que los mayores incrementos salariales se potenciaron en renglones relevantes en términos de exportación de bienes y servicios y recaudación de divisas para el país, con excepción del sector turístico.

² Si bien este dato no recoge los anticipos y salarios que se pagan en el sector no estatal, puede ser tomado como indicador de ingresos debido a que el sector estatal continúa ocupando a la mayoría de las personas ocupadas y, por otra parte, según las regulaciones para ejercer el trabajo por cuenta propia, los salarios que se pagan en este sector tienen que ser iguales o superiores al salario medio nominal mensual del territorio donde esté enclavado el negocio.

³ Según un artículo del periódico *Trabajadores* que reseña los debates del Consejo Nacional de la CTC en febrero del 2017, un 60% de los trabajadores del sector empresarial estatal del país, estaba por debajo del salario medio –que promedió 824 pesos mensuales en 2016–; un 38% de trabajadores devengaron entre 824 y 2000 pesos mensuales; y un 1,7% que superó esta última cifra (Mangela, 2017).

Desde el punto de vista territorial, todas las provincias presentan mejorías en relación con este indicador en el período analizado. No obstante, se debe resaltar que los territorios de mayores salarios promedios en el 2017 fueron: La Habana (842 CUP), Ciego de Ávila (818 CUP), Pinar del Río (813 CUP) y Villa Clara (808 CUP) por ese orden; aunque seis provincias se encuentran por encima de la media nacional. Por su parte, el salario medio más bajo se registra en la provincia Guantánamo con 624 CUP, salario que representa el 73,6% del mayor. Se debe resaltar que los patrones de retraso relativo de la región oriental, se hacen visibles también en relación con los salarios; son estas en su totalidad las provincias de más bajo salarios medios en el país, a las que se le suma el municipio especial Isla de la Juventud.

En cuanto a las investigaciones, como se comentó al inicio del epígrafe, no son abundantes aquellas que abordan específicamente las desigualdades económicas. En la década de los años noventa, el empeoramiento de las condiciones de vida de la población debido a la crisis económica y la estrategia de reajuste puesta en práctica para su enfrentamiento, tuvo como uno de los efectos sociales más significativos la ampliación de las distancias sociales y la emergencia de nuevos actores socioeconómicos. Desde la investigación se suscitaron varias publicaciones que abordaron esta problemática. Una de las formas de expresar la desigualdad lo fue la publicación del Coeficiente de Gini sobre la concentración del ingreso⁴, que si bien en 1986 alcanzó un valor de 0,22 (Zimbalist, 1989) (Cuba se encontraba entre los países menos desiguales en términos de distribución de ingresos), entre 1996-1998 se encontraba en 0,38 (Álvarez y Mattar, 2004) y esta tendencia creciente se ha mantenido.

En el primer quinquenio de la década de los años 2000 se dieron a conocer varios trabajos que abordaban las desigualdades económicas derivadas de la crisis y las reformas de los años noventa, en sus diversas expresiones: desigualdades de ingreso, canasta básica, pobreza y exclusión social, entre otros temas. En este sentido, resultan relevantes los trabajos realizados por el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE) dirigidos en ese entonces por la doctora Ángela Ferriol. Una de las líneas de investigación de esos años y que se realizó bajo el auspicio de un Programa Nacional de Ciencia y Técnica (PNCT), nombrado *Programa Efectos sociales de las medidas de ajustes económicos sobre la ciudad. Diagnósticos y perspectivas*, lo constituyó el estudio sobre la población en riesgo en Ciudad de La Habana. Este trabajo, concluía entre otros aspectos, que:

La pobreza en Ciudad de La Habana, estimada en un 20% de la población, se caracterizó por la insuficiencia de ingresos monetarios que limita el consumo de alimentos o de otros bienes y servicios esenciales a niveles carenciales. Se manifiesta

⁴ Este indicador resulta de dividir los ingresos de una sociedad en 10 partes iguales o deciles de apropiación, desde los más pobres hasta los más ricos. Expresa numéricamente la desigual apropiación de los ingresos al interior de una determinada sociedad.

también en privación de vivienda, o en el deterioro del inmueble o de su equipamiento, y por privaciones en el transporte público

La presencia de niños en el hogar, de ancianos solos, de incapacitados para el trabajo, de enfermos crónicos, de personas dedicadas a las labores domésticas, de desocupados y de miembros en el hogar que no estudian, trabajan ni desean realizar esas actividades son rasgos frecuentes de estos hogares. Predomina también en ellos las familias con color de la piel negra o mestiza y la presencia de mujeres (Ferriol, Ramos y Añé, 2004, p.97).

Este y otros trabajos producidos por el INIE en esos años se centraron en definir desde lo conceptual y lo metodológico las particularidades de la pobreza en Cuba. Al mismo tiempo, alertaron sobre algunos de los efectos de los cambios en las políticas en este fenómeno social.

En el trabajo del 2004, (Ferriol, Ramos y Añé, 2004, p.97) se centran solo en La Habana, proponen un diagnóstico sociodemográfico, socioeconómico y subjetivo de la población en riesgo de este territorio, para buscar sus causas y posibles vías de eliminar las condiciones que la mantienen en ese nivel. En esta investigación se concibió la integración de las técnicas cuantitativas y cualitativas en la elaboración del estudio: se aplicó una encuesta a una muestra de la población representativa de la provincia, un estudio a 120 familias a través de una entrevista semiestructurada, así como para el análisis utilizaron diversos *softwares*. Accedieron a módulos de la Encuesta sobre la Situación Económica de los Hogares que favoreció el análisis general. Al mismo tiempo, las decisiones metodológicas fueron consultadas en diferentes talleres realizados con expertos en el tema.

En la revisión bibliográfica que se presenta en este texto, las autoras abordan los diferentes enfoques del concepto de pobreza: desde la visión de incapacidad monetaria para mantener estándares de consumo recomendados (enfoque de los ingresos/consumo) cuya medición más frecuente remite a la Línea de Pobreza⁵ o el enfoque de consumos efectivos, que usualmente hace referencia a las necesidades básicas insatisfechas (NBI). También abordan el enfoque de pobreza como privación de capacidades de ejercicio de autonomía. Otro enfoque incluye a aquellos procesos que excluyen a los individuos o grupos de la participación social. Estos conceptos no solo se basan en el enfoque de privación de necesidades, también reflejan las causas estructurales y las consecuencias de los procesos de empobrecimiento.

⁵ Hasta finales de los años ochenta en la casi totalidad de los estudios de pobreza se utilizaba el salario mínimo como medida para definir la LP. Otros estudios preferían la estructura del consumo de la población de bajos ingresos o un corte del 20% en la estructura por deciles para definir a los pobres. En la década de los años noventa con la realización de las encuestas de presupuesto familiar se comenzaron a establecer las LP con el enfoque de la canasta básica.

En términos metodológicos, la obra presenta gran riqueza al exponer el estado del arte de investigaciones empíricas sobre pobreza en diferentes países, épocas y métodos. Muestra el debate sobre la construcción de indicadores cuantitativos agregados como ingresos o consumo. Sobre este último, refieren que el consumo de una persona o de un hogar está asociado estrechamente a sus compras para la mayoría de los bienes y servicios, especialmente aquellos que puedan ser almacenados y recomiendan esta medición cuando el período de aplicación de la encuesta es muy pequeño.

Otro de los trabajos relevantes de esa década lo constituyó el libro coordinado por Elena Álvarez y Jorge Mattar en 2004: *Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo XXI*, como un esfuerzo realizado por sistematizar la relación entre la política social y las reformas estructurales de los años 90, así como sus efectos más inmediatos en las distancias sociales. Dedicaron un capítulo al análisis de la pobreza y la desigualdad. Combinan el enfoque de medición de ingresos con el de canasta básica, supuesto que apoya el concepto de *población en riesgo* en lugar de pobreza, pues refiere a una población con insuficientes ingresos para cubrir la canasta básica pero que, a la vez, recibe servicios gratuitos y subsidiados que los sitúa en mejores condiciones que otras poblaciones de América Latina en una situación similar.

En el eje de los estudios de pobreza, resulta también relevante para el análisis sobre desigualdades económicas, desde una perspectiva interseccional, la investigación de María del Carmen Zabala llamada *Jefatura de hogar, pobreza urbana y exclusión social: una perspectiva desde la subjetividad en el contexto cubano* (Zabala, 2009) Esta investigación de corte cualitativo, se basó en la aplicación de grupos de discusión, entrevistas en profundidad e historias de vida a mujeres jefas de hogar, así como entrevistas y talleres con especialistas en la temática. Utilizó, además, el estudio de casos como método de análisis, por sus beneficios para la interpretación en profundidad de un fenómeno particular. La selección de las mujeres a entrevistar fue intencional, sugeridas muchas veces por informantes clave. Su condición de jefa de hogar se definió a partir de la consideración de aquellas mujeres responsables reales de sus hogares, reconocidas como tal por sus miembros, y que no residían de forma estable con una pareja. La condición de pobreza se delimitó a partir de considerar aquellas mujeres jefas de hogar, cuyos hogares tuvieran ingresos per cápita inferiores a 100 pesos mensuales; además de que habitaban en condiciones precarias de vivienda.

En este trabajo aparece una amplia sistematización teórica y metodológica sobre el tema. Nuevamente se cuestiona el enfoque de evaluar la pobreza a partir de los enfoques bidimensionales, los cuales

consideran el carácter complementario de las informaciones que aportan los métodos de LP y de NBI y a partir de la combinación de sus resultados derivan diferentes tipos de pobreza —estructural o inercial, reciente o coyuntural y crónica— (Feres y Mancero, 2001; Kaztman, 1989). Una propuesta ampliamente difundida en América Latina es el método integrado de la pobreza de Boltvinik (1992), en el que se identifican diversas carencias (ingreso, acceso a servicios, activos o patrimonio básico, niveles educativos, tiempo disponible, propiedad de activos no básicos, este último generalmente omitido en otros métodos) (Zabala, 2009, p.21).

La autora, además, utiliza el término “exclusión social” en el análisis de la pobreza, porque capta el carácter multidimensional de este fenómeno y no solo sus aspectos económicos. Este enfoque permite incorporar una perspectiva histórica y dinámica que favorece visualizar la pobreza como proceso, y destaca, entre otros factores, su dimensión sociocultural (Domínguez, Cristóbal y Domínguez, 2000). En esta dimensión es posible incluir en el análisis algunas aristas como género, raza, edad y otros atributos socioculturales, que posibilitan explicar cómo en similares contextos, la situación de pobreza no afecta a todos por igual, sino que ciertos grupos y segmentos sociales son los más desfavorecidos (Zabala, 2009, pp.21-22).

Como ya se comentó, en la década de los 2000 se apreció un creciente interés sobre los temas relativos a la desigualdad, muy vinculado a las preocupaciones sobre los resultados de las reformas implementadas en la década de los años noventa. En este período, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) fue uno de los centros productores de conocimientos más importantes del país. El equipo de Estructura Social, el Equipo de Estudios del Trabajo, el Equipo de Juventud y de Familia estuvieron entre los que abordaron estos temas. También el Equipo de Estudios Rurales, del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, dio cuenta permanente, a través de su red de estudios sobre transformaciones rurales, de los cambios que estaban aconteciendo en este ámbito social.

Entre los aspectos más estudiados por estos colectivos de investigación se encontraban las tendencias generales de los procesos de reestratificación social, los cambios en la estructura de propiedad y gestión, el surgimiento de nuevos actores económicos y sociales, cambios en la estructura agraria, integración/desintegración social de la juventud, entre otros temas. Las metodologías para abordar las diferentes formas de desigualdad que implementaron estos grupos en sus análisis, permitió que se analizara la desigualdad, no solo desde la perspectiva económica sino en interrelación con otros factores condicionantes o resultantes.

En el libro de Mayra Espina: *Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad* (2008), se presenta el concepto de reestratificación social como proceso de ensanchamiento de las

distancias económicas y sociales entre las diferentes capas o estratos de una sociedad dada. Este proceso muestra las diferencias en la disponibilidad económica y en las posibilidades de acceso al bienestar material y espiritual. En un trabajo del Grupo de Estructura Social del CIPS titulado *Componentes socioestructurales y distancias sociales en la ciudad* (Espina, Núñez, Martín y Ángel, 2003) se presenta el resultado de una investigación en Ciudad de La Habana, donde aplicaron una metodología múltiple: análisis de documentos (estadísticas continuas y encuestas oficiales, resultados de otras investigaciones afines) y entrevistas individuales a una muestra cualitativamente seleccionada. Utilizaron, además, fuentes secundarias como: estadísticas de trabajo y salario producidas por la Oficina Nacional de Estadísticas y la Territorial de Ciudad de La Habana, la Encuesta de Hogares del 2001 (también realizada por la ONE) así como estudios afines al tema. Los indicadores tomados en cuenta para la entrevista fueron: fuentes de ingresos, vínculo con la propiedad y municipio de residencia, por su fuerte grado de asociación con el estado de las desigualdades sociales. El estudio se concentró en tres grandes dimensiones de la ubicación socioestructural: las formas de propiedad, la ubicación sociocupacional y la magnitud y fuentes de los ingresos familiares, a lo que se añade una consideración sobre la relación entre subjetividad y desigualdad. La selección de los sujetos a entrevistar se basó en una muestra de confianza, es decir, los sujetos elegidos, además de representar una ubicación socioestructural de interés para el estudio, deberían tener algún vínculo con el entrevistador que asegurara la confiabilidad y la veracidad de las respuestas en temas que, como regla, las personas no suelen declarar abiertamente (especialmente los ingresos y sus fuentes).

El Equipo de Estudios del Trabajo en los años 2000 produjo un resultado de investigación de especial relevancia (Martín, Capote, Pérez, Candelé y Campos, 2003). El propósito de esta investigación residía en evaluar los efectos del reajuste de los años noventa en: la percepción de los cambios, el empleo, el sistema de relaciones en el trabajo —calificación, estimulación y participación— y la subjetividad asociada al trabajo. Para ello, tomaron como muestra cuatro provincias del país: Ciudad de La Habana, La Habana, Villa Clara y Holguín, atendiendo a los criterios de territorialidad y representatividad de los espacios. Las personas entrevistadas fueron seleccionadas por pertenecer a los puestos clave de las áreas fundamentales que aseguran el flujo productivo o de servicio de la empresa. En este trabajo utilizan la categoría de *multiespacialidad económica* cubana para designar la coexistencia, en el mismo tiempo histórico, de distintos espacios económicos de acción para actores y organizaciones laborales. Estos espacios económicos (concepto que define empíricamente la multiespacialidad) son ámbitos de acción de los objetos, los medios y la fuerza de trabajo que han ido diferenciándose entre sí a partir de cómo se configuran sus vínculos internos entre los siguientes elementos: tipo de propiedad predominante (estatal, mixta, cooperativa, privada); grado de compromiso

con la planificación o con el mercado como mecanismo de regulación; formas de gestión y mecanismos y/o prerrogativas de administración prevalecientes; condiciones y relaciones de trabajo características a su interior.

Los estudios sobre juventud realizados por el Grupo de Estudios sobre Juventud (GESJ) del CIPS, tienen su anclaje teórico en el concepto de integración/desintegración social que la concibe como:

(...) un proceso dinámico, en constante evolución, que toma en cuenta el devenir histórico de la nación, evalúa el presente y considera las perspectivas futuras en función de los distintos escenarios posibles: económicos, sociales y políticos, a partir de las condiciones internas y externas (Domínguez, Cristóbal y Domínguez, 2000, p.4).

De manera operacional identifican tres elementos básicos de su existencia, ellos son:

a) *justicia social*, entendida como la real igualdad de oportunidades para el acceso equitativo de todos los grupos e individuos a los bienes y servicios que brinda la sociedad y la ausencia de discriminación de cualquier tipo, b) *participación*, entendida no exclusivamente como participación política, sino que coloca en primer lugar la participación en la vida social y económica a través del estudio y el trabajo; reconoce la posibilidad de intervenir en las decisiones que le conciernen, no solo como beneficiarios sino también como formuladores de estas decisiones y c) *cohesión nacional*, entendida como el sistema de valores y normas compartidas por los distintos grupos sociales que se configura y modifica en el propio proceso participativo. En las investigaciones se reconoce que mientras no se eliminen las diferencias clasistas y, las principales desigualdades socioeconómicas por concepto de raza, etnia, género, generaciones, ubicación territorial y otras, no se logra la verdadera integración social. El GESJ ha realizado estas investigaciones de manera periódica, algunas propiamente dirigidas a la integración social (Domínguez, Cristóbal y Domínguez, 2000, 2003) y otras asociadas a la subjetividad juvenil (Domínguez, Cristóbal y Domínguez, 2002, 2004), a través de las dimensiones: aspiraciones, percepciones de la sociedad e identidad juvenil.

El Grupo de Estudios sobre Familias (GEF) del CIPS también realizó importantes contribuciones al estudio de esta institución en la década de los años noventa. Para este trabajo, resulta de alta relevancia la sistematización de los enfoques teórico-metodológicos que sobre el par familia-hogar se realiza en el libro: *Las familias cubanas en el parteaguas de dos siglos* (Colectivo de autores, 2010). En este texto se explica que, para el caso cubano, la concepción de la familia se basa en los principios de consanguinidad y parentesco, mientras que para definir el hogar (o unidad doméstica) funciona como acotaciones espacio-tiempo que no definen a priori

la existencia de una familia, más bien para definir el grupo de personas que conviven bajo el mismo techo (Colectivo de autores, 2010, p.13).

En este texto se resumen diferentes tipologías de familias, teniendo en cuenta criterios como las características estructurales y su extensión (monoparental, nuclear, extendida, extendida recompuesta); el lugar de residencia (urbano/ rural), las características económicas (origen y cuantía de los ingresos familiares, condiciones de la vivienda, pertenencia socioclasista de los miembros de la familia) así como características del jefe de núcleo (sexo, edad, estado conyugal, nivel de instrucción). Al mismo tiempo, resumen los principales enfoques teóricos metodológicos para su estudio desarrollados entre 1997 y 2006: modelos de diagnóstico del funcionamiento familiar y otro orientado a la caracterización de la salud familiar (Colectivo de autores, 2010, pp.18-28).

Puntualizan en el texto citado los ámbitos que han añadido mayor complejidad a la vida familiar: alimentación, transporte y vivienda. En este sentido, el GEF identificó que las principales medidas económicas que habían impactado la vida de las familias fueron el incremento de precios de productos que no constituyen primera necesidad, sin embargo, que no tuvieron en cuenta las diferencias territoriales o de edad que influyen en el tipo de consumo que se hace de estos bienes, por solo señalar algunos ejemplos.

Por otra parte, apuntaron que el paquete de medidas que amplió la conexión con el mercado mundial —apertura al capital extranjero, creación de sector emergente, legalización de la circulación de divisas, autorización de las remesas, así como la creación de mercados de libre formación de precios—, y la implementación de un sistema de estimulación en divisas favoreció la ampliación y funcionamiento de la dualidad monetaria, con desventajas de poder de compras del peso cubano. Esta situación favoreció la reestructuración del mercado laboral en función de garantizar el acceso a la divisa o al CUC, al mismo tiempo que diversificó las fuentes de ingreso no salariales e incluso, no derivadas del trabajo. Además, la existencia de mercados con mayor calidad y mejor surtidos, cuyas ventas se realizan en CUC, condicionaron la ampliación de espacios de desigualdad en hábitos de consumo.

Si bien la mayoría de los estudios citados del CIPS, así como las investigaciones rurales, no tenían como objetivo valorar las desigualdades económicas, en todos los estudios esta aparece como un importante eje estructurador de desigualdades, principalmente asociado a la ocupación que detentan los sujetos y a los ingresos asociados a esta.

La década de los años 2000 se caracterizó por el rescate en la centralidad de las políticas sociales, en el marco de la llamada Batalla de Ideas⁶.

Se intentó desarrollar el país a través del impulso de la educación y la cultura, hacia una economía del conocimiento, aprovechando las potencialidades de los recursos humanos formados y tratando de incorporar a aquellos grupos que habían quedado excluidos de las oportunidades de acceso que ofrecían las políticas universales⁷. Se impulsaron más de 200 programas en el campo de seis grandes esferas: Educación, Cultura, Atención y Desarrollo Social, Trabajo Político Ideológico, Inversiones y Salud, con el objetivo de ampliar el acceso y la calidad de estos servicios (Escandell, 2006).

Este proceso se inicia en un contexto donde se manifestó una ligera recuperación del PIB, luego de una desaceleración de su crecimiento desde finales de la década anterior⁸. En la etapa, el gasto social creció más que el crecimiento del producto interno bruto (Anaya y García, 2018). Al mismo tiempo, ocurrió un reconocimiento público de la contradicción entre los propósitos de justicia social del proyecto revolucionario y la reproducción de desigualdades en el contexto de la crisis atravesada desde los noventa y las reformas implementadas. Se jerarquizó la agenda social y se promovieron transformaciones orientadas a la superación de desigualdades.

Entre 2000-2003 ocurrió un levantamiento de información acerca de determinadas problemáticas: jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo, menores residentes en barrios marginales de la capital, niños y niñas con bajo peso / baja talla, jubilados y pensionados de más bajos ingresos económicos, personas con discapacidad, entre otras situaciones que reclamaban de atención (Gómez, 2015, pp.49-55).

Las investigaciones de ciencias sociales publicadas y que dan cuenta de los efectos de estos programas en términos de ampliación de oportunidades para grupos que quedaron rezagados de la década de los años noventa resultan de menor cuantía que las que reflejan los efectos de la década precedente. En este período se efectuaron importantes investigaciones sobre grupos vulnerables, impulsadas por el Estado que, si bien no declaraban directamente la desigualdad económica como uno de los ejes de análisis, esta dimensión se encontraba incluida principalmente desde los ingresos, aunque con un enfoque multidimensional.

6 La marcha de jóvenes miembros de las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) el 5 de diciembre de 1999, frente a la Oficina de Intereses de EUA para reclamar la devolución del niño Elián González marcó el inicio de una etapa caracterizada por la centralidad de la superación de las personas y el intento de mejorar las condiciones de vida. Se denominó Batalla de Ideas por ser una “batalla de pensamiento” (Escandell, 2006).

7 Sobre el tema consultar Rodríguez, J. L., Millares, M. y Martínez, O. (2000).

8 En el 2010 este indicador se incrementó respecto al año anterior en 2,4% (ONEI, 2014).

Se caracterizaron por tener coberturas altas, formato censal (100% del grupo poblacional de interés), con el objetivo de dictar política de promoción de equidad sobre la base de estos diagnósticos y salidas para la adopción de políticas.

Entre las más relevantes se encuentran el *Estudio psicosocial de las personas con discapacidad* y el *Estudio psicopedagógico, social y clínico genético de las personas con discapacidad intelectual*, ambos desarrollados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el 2003. En estas investigaciones fueron censados todos los hogares donde vivía al menos una persona con discapacidad y participaron 33626 profesionales, en su mayoría de los sectores de salud y educación.⁹ A partir de sus resultados, se diseñaron e implementaron importantes políticas sociales para las personas con discapacidad y sus familias.

La metodología utilizada para este análisis tuvo un enfoque mixto, a partir de la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas: entrevistas estructuradas, cuestionarios, pruebas psicométricas y psicopedagógicas, exámenes clínicos. Las principales dimensiones sobre las que se indagó fueron: caracterización epidemiológica, estado nutricional, hábitos tóxicos de la persona con discapacidad, ingresos per cápita del núcleo familiar, condiciones de vida, entre otros (Cobas, 2010).

También se desarrolló un grupo de estudios con el objetivo de aplicar acciones afirmativas para grupos de población en estado “crítico”. Entre las investigaciones de mayor alcance se encontraron los relacionados con: jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo, menores residentes en barrios marginales de la capital, niños y niñas con bajo peso / baja talla, jubilados y pensionados de más bajos ingresos económicos, niños con cáncer y enfermedades raras, adultos mayores (Gómez, 2015, pp.39-47).

Pocos trabajos abordan los efectos de las políticas de apertura de oportunidades y de acciones afirmativas para grupos vulnerables que se generaron en esta etapa.

Desde el gobierno se puede encontrar un balance sobre estos temas en (Rodríguez, 2005). Desde la academia, Martín y Leal (2006) comentan que las sedes universitarias municipales (SUM), instituciones municipales subordinadas a las universidades centrales donde se estudiaban cerca de medio centenar de carreras de prácticamente todas las ramas de la ciencia, favorecieron el ingreso de una mayor proporción de hijos de obreros y campesinos, así como de negros y mestizos.

Por otra parte, en el 2006 destaca un trabajo de Anicia García y Betsy Anaya (García y Anaya, 2007) que documenta los cambios y programas más importantes implementados en

⁹ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. III Plan de Acción Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad 2006-2010, 4-5.

la etapa de la Batalla de Ideas, y muestra la situación de aspectos de las condiciones de vida de la población, como la vivienda, el transporte, la alimentación y los ingresos de las familias, principalmente salarios y pensiones, para cubrir los gastos básicos.

En este estudio, las autoras, a través de estadísticas públicas, analizan la ampliación en el acceso y cobertura de programas implementados en salud, educación, empleo, cultura, ayudas al exterior, así como el retraso aún evidente en algunas esferas señaladas en el párrafo anterior. De especial importancia resulta la propuesta metodológica para calcular el costo de la canasta básica de alimentos según requerimientos nutricionales y de otros gastos de una familia urbana. Según estos cálculos, el principal destino de los gastos de una familia de tres personas —según diferentes composiciones respecto al empleo— resultaba ser la alimentación (entre el 62%-75% de los gastos). También se explica que, teniendo en cuenta el salario y la pensión promedio del 2005, existía un déficit de ingresos entre 21-345 pesos para cubrir el costo de la canasta básica recomendada, dependiendo del tipo de familia antes comentada. Por esta razón, a pesar de los incrementos salariales y de pensiones medias que se registraron en esos años, las familias cuyos ingresos provenían principalmente de los salarios estatales y las pensiones, estaban en peores condiciones para cubrir las necesidades mínimas (García y Anaya, 2007, pp.37-46).

Sobre la distribución de ingresos y sus factores determinantes como vía de acceder al bienestar se encuentra en este período, la investigación de Susset Rosales. En ella la autora, a través del análisis cuantitativo de las encuestas sobre la situación económica de los hogares de los años 2005 y 2006, se propuso analizar los efectos de un conjunto de determinantes microeconómicos —características educativas, demográficas, laborales, geográficas y socioeconómicas familiares— en los ingresos monetarios per cápita de los núcleos, a través de tres modelos econométricos —dos de corte transversal y uno de dato panel— que permitan explicar dichos ingresos para el caso de Cuba (Rosales, 2008, p.3). Entre sus principales resultados se encuentran que el acceso a la divisa, la existencia de amas de casas y de niños en el hogar, el hecho de vivir en Ciudad de la Habana, la cantidad de asalariados, la escolaridad del núcleo y la existencia de técnicos constituyen las principales determinantes de los ingresos, (Rosales, 2008, p.140). Estas variables producen efectos diferenciados, a saber:

1. La escolaridad del núcleo resulta ser una variable relevante, sin embargo, no constituye el factor más importante de diferenciación de los ingresos.
2. Los núcleos con niños y adolescentes presentan como promedio ingresos inferiores en el orden del 25% con respecto a los núcleos que no tienen.

3. La existencia de ancianos en un núcleo, con respecto a los hogares que no tienen, no es, en el tiempo, un elemento que pueda marcar diferencias en los niveles de ingresos monetarios per cápita de las familias.
4. El tener acceso a divisa constituye el determinante más importante y de mayor impacto de los niveles de ingresos monetarios per cápita de los núcleos. Los núcleos que tienen acceso a divisas frescas perciben, como promedio, ingresos superiores en el orden del 43% en el año 2005 y 94% en el año 2006 respectivamente, con respecto a los núcleos que no tienen.
5. El determinante laboral más importante es la cantidad de asalariados en el núcleo. Por cada asalariado adicional que se incrementa en el núcleo, los ingresos se incrementan como promedio en un 8% en el corte transversal y en un 13% a través del tiempo.
6. La categoría ocupacional dentro del núcleo, vista como la calidad de ese asalariado, también incide sobre los ingresos. Los núcleos con técnicos son los que perciben, como promedio, más ingresos en comparación con los núcleos con administrativos, obreros y trabajadores de servicios.
7. La existencia de amas de casa en el hogar constituye un elemento diferenciador importante de los ingresos monetarios de los núcleos, al ocupar el segundo lugar en orden de importancia con respecto al total. Los núcleos con amas de casas pudieran hacer un mayor uso social de ese potencial —en caso de ser posible— si se incorporaran a la vida económica, y esto pudiera representar un incremento significativo de los ingresos del núcleo.
8. Los núcleos con personas que se dedican al trabajo por cuenta propia presentan, como promedio, ingresos superiores en el orden del 31, 29 y 24% en 2005, 2006 con respecto a los núcleos que no tienen. Las diferencias de ingresos generadas por la existencia de núcleos con cuentapropistas se han reducido en un porcentaje importante en el tiempo.
9. Los núcleos con desocupados tendrán, como promedio, ingresos inferiores en el orden del 35, 36 y 24% en 2005, 2006 respectivamente, con respecto a los núcleos que no tienen.
10. El hecho de vivir en Ciudad de La Habana supone, como promedio, incrementos en los niveles de ingresos en el orden del 42% en el 2005 y 15% en el 2006 con respecto a las provincias orientales (Rosales, 2008, pp.134-135).

Puede observarse que en la etapa 2000-2007 las políticas sociales generaron procesos de inclusión social y atención a grupos vulnerables, que habían quedado rezagados en la década precedente. Sin embargo, una de las principales críticas que se realiza a las decisiones políticas adoptadas en esta etapa radica en la insostenibilidad económica de este modelo y la ineficiencia del gasto social y sus bajos retornos a la economía.

Valoración sobre investigaciones realizadas entre 2008-2018

Para este trabajo fueron revisados 98 estudios publicados entre 2008-2018, que abordan desde diferentes aristas las desigualdades económicas en el período de estudio y que incluyen tesis de licenciatura, maestría y doctorado, resultados de investigación, artículos de libros y revistas, así como artículos de periodismo económico principalmente. Como se observa en la tabla 1, los años en que se identificó mayor cantidad de trabajos fueron el 2017 con 17, 2013 con 13 trabajos, seguido del 2014 con 11.

Tabla 1 Número de trabajos revisados por año y temática de entrada a las desigualdades económicas

Año	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Bienes											2	2
Capital cultural, económico y social			2	1								3
Consumo		1			1	1		1		3		7
Educación			1				1	1	1			4
Estructura social	2											2
Impuestos						2		1	1			4
Ingresos	4	3	1	1	3	1	6	4	1	9	1	34
Ocupación		1	3	1	3	3	1	8		5	2	27
Pobreza	1					3	1	1				6
Remesas	1					1	1	1	1	1		6
Riqueza	1								1		1	3
Total	9	5	7	3	7	11	10	17	5	18	6	98

Fuente: Elaborado por la autora.

Existe una diversidad de “puertas de entrada” al análisis de las desigualdades económicas, en algunos casos como causa de otras desigualdades y en otros como consecuencia. La mayor cantidad de trabajos (34) aborda las desigualdades económicas desde los ingresos: salarios, los

que provienen de otras fuentes relacionadas con el trabajo, fuentes ilegales. Sin embargo, solo en pocos de ellos, el eje de análisis fundamental es la desigualdad económica asociada al ingreso, al consumo, a los bienes o a la distribución del impuesto sobre los ingresos. Predomina un abordaje de los ingresos como indicador de situación socioeconómica para analizar diferentes temas: diferencias por color de la piel, identidad social, condiciones de salud, bienestar, género, marginalidad, territorio, pensiones, entre otros.

La ocupación es otra de las entradas principales de este análisis (27 fuentes), como indicador aproximado (*proxy*) de los ingresos y salarios, así como de las diferencias en la posición de la estructura socioclasista. Aunque en menor proporción (9), el consumo —tanto desde la canasta básica como el consumo cultural— es uno de los ejes de análisis de las desigualdades económicas. El estudio de las remesas como una fuente de ingresos resulta otro eje recurrente, al igual que en el tema de pobreza. En cada tópico se identificaron seis trabajos.

Dentro de la revisión llevada a cabo, la Sociología aporta la mayor cantidad de resultados¹⁰ (36), seguida por la Economía (22) y la Psicología (21). Las ciencias de la salud tienen una presencia creciente en los últimos años de la mano de la línea sobre los determinantes sociales de salud, en la que se han identificado siete trabajos.

Tabla 2 Trabajos analizados por disciplina

	Total
Antropología	4
Arquitectura	1
Economía	22
Filosofía	1
Geografía	2
Lingüística	1
Periodismo	3
Psicología	21
Salud	7
Sociología	36
Total	98

Fuente: Elaborado por la autora.

Este comportamiento muestra que, aunque no predominan las investigaciones específicas sobre desigualdades económicas, estas constituyen un eje recurrente en los análisis de desigualdad, ya sea como un indicador, como una causa o una consecuencia del fenómeno estudiado.

¹⁰ Muchos resultados de investigación tienen un enfoque multidisciplinar; sin embargo, para los fines de este estudio, se tomó la disciplina a la que pertenece el primer autor o la primera autora.

Predominan estudios de caso realizados en municipios y comunidades de La Habana (40), seguidos por los que tienen alcance nacional (38) y que principalmente se basan en estadísticas públicas nacionales como los Anuarios de Estadísticas de Cuba, las Encuestas de Hogares y de Ocupación, así como la Encuesta de Conglomerados Múltiples (MICS-UNICEF). Además, seis trabajos presentan estudios de caso en diversos territorios: uno en 10 municipios del país, otro en seis provincias, otro en La Habana y municipios de la antigua provincia La Habana (Bejucal, Mariel). También en La Habana y Matanzas, así como La Habana y Santiago de Cuba; otros dos lo hacen en la Ciénaga de Zapata. Si bien estos estudios no tienen la intención de comparar los comportamientos de los fenómenos estudiados, muestran diferencias significativas entre los territorios.

Según la metodología utilizada predominan las investigaciones que tienen un enfoque mixto (28), a partir de la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas y un análisis que los integra. Le sigue el enfoque cualitativo (27), especialmente mayoritario en temas como capital económico, social y cultural (cuatro) y remesas (cuatro de seis), así como en consumo.

Las técnicas de investigación más utilizadas fueron las entrevistas, encuestas, grupos focales, historias de vida, escalas, técnicas de proyección (dibujos, completamiento de frases, etc.), observación, análisis de contenido, y mapas. A partir de estas técnicas, seis investigaciones calculan índices de diferente índole.

Predominan los estudios con muestras intencionales y de confianza. Las investigaciones que declaran su carácter mixto, por lo general aluden a la aplicación de técnicas cuantitativas como cuestionarios y escalas en muestreos intencionales junto con técnicas cualitativas. Las investigaciones de corte cuantitativo utilizan encuestas nacionales por lo general, ya sean la Encuesta de Hogares y la de Ocupación, así como las MICS-UNICEF. Los resultados de investigación que manejan los análisis estadísticos se basan en publicaciones como los Anuarios Estadísticos, la Base de Datos sobre Mortalidad, así como otras fuentes estadísticas.

Problemáticas identificadas

Como se comentó con anterioridad, la mayoría de los trabajos no buscan directamente estudiar las desigualdades económicas. Por lo general, esta dimensión se aborda en un análisis transversal de la problemática que se plantea estudiar en los objetivos de cada trabajo y puede asumirse como una de las causas o como una de las consecuencias de otro grupo de desigualdades. Aquellas que abordan directamente la desigualdad económica se relacionan con el bienestar, el consumo, el capital económico y social, los ingresos, la ocupación, las pensiones, las remesas, los impuestos, la estructura y la movilidad social, la riqueza y la pobreza. Otras aristas también atravesadas por la desigualdad económica son la salud, la educación y la participación, así como la dimensión territorial.

Su carácter causal se observa —principalmente— en las investigaciones sobre bienestar, desde la medición de esta dimensión a partir de variables monetarias (Romanó, 2012) y no monetarias (Schettino, Romanó, Echeverría y Gabriel, 2018), así como desde una visión más integral —bienestar social de las familias—, donde se calcula un índice de bienestar social de las familias y un índice de desigualdad socioeconómica de Theil (Mazeira, 2011). Muy relacionada con esta línea se encuentran los trabajos que aluden en ensayos (García, 2005; Fernández, 2015) o con investigaciones empíricas (Pañellas, 2015) a las diferentes formas de entrada a la noción de prosperidad y su relación con el bienestar y el desarrollo: la primera referida a los ingresos, riquezas, bienes materiales principalmente a nivel individual; la segunda, además, integra la salud y la felicidad como indicadores importantes e incluye el plano que trasciende a las individualidades.

También en el 2016 se realizó una investigación sobre la percepción social de las nociones de bienestar y prosperidad en La Habana (Pañellas, Arango y Rosales, 2018) que caracterizó la percepción sobre los conceptos de *bienestar y prosperidad*, atendiendo a estrategias de acceso, locus de control¹¹ y condiciones materiales de vida que inciden. Las autoras analizan estos resultados a través de las variables: grupos pertenecientes al sector estatal y no estatal, en los roles de empleado y empleador; grupos pertenecientes a la esfera no laboral —amas de casa, jubilados, sin ocupación actual y estudiantes que trabajan—teniendo en cuenta su sexo, color de la piel y grupo etario. Concluyen que la percepción de prosperidad y bienestar se asocia al progreso económico, social y cultural a través de la materialización en proyectos de vida, en este caso estrechamente vinculados al trabajo. Observan diferencias de género y etarias para ambos conceptos y entre actores laborales y no laborales.

11 Término psicológico que identifica la fuente de movilización de una persona, es interno o externo. Llamado también *punto de control*, y se relaciona con a quién responsabilizas con lo que te pasa, si a ti mismo o al entorno.

En esta línea, uno de los trabajos revisados explora las desigualdades sociales percibidas en la juventud capitalina relacionadas con educación y empleo y encuentra que la noción de bienestar está vinculada con el nivel de ingresos individual y familiar (Vallellano, 2017).

También en las investigaciones sobre consumo, ya sea de alimentos (Nova, 2013) o de consumo cultural —audiovisuales, libros, TIC— (Infante, 2009; Domínguez, Rego, García y Moretón, 2012; Domínguez, Castilla y Rego, 2013; González, 2013; García y Anaya, 2015; Ocampo, 2017, Morales, 2017; Moras y Rivero, 2017), las diferencias remiten a desigualdades en los ingresos.

Las pesquisas que relacionan el capital económico con el cultural y social (Domínguez, 2010; Travieso, 2010; Hidalgo, 2011; Ramírez, 2013), perciben estas características —principalmente el nivel de ingresos, propiedades y bienes— como atributos familiares que configuran tipos de familias, por lo que se puede apreciar que el capital económico aquí es valorado como causa de este comportamiento.

En las investigaciones sobre estructura (Llopiz, 2008 y García, 2014) y movilidad social (Espina y otros, 2008), la configuración de la política salarial y la tenencia de activos sociales, entre los que se encuentran los ingresos, son causales de la posición que se detenta en la sociedad y de las oportunidades o no de moverse entre estas posiciones de manera ascendente.

Por otra parte, los niveles de ingreso a nivel familiar son descritos como una de las determinantes de correlación inversa en la participación laboral en Cuba (Esquenazi y Rosales, 2017; Rosales, 2017). En este sentido, la capacidad de generar y decidir sobre los ingresos resulta un indicador valorado dentro de la autonomía económica de las mujeres, una de las dimensiones para lograr la igualdad de género que aborda el informe de Ana Violeta Castañeda (2018), donde se problematiza el sistema de cuidados existente en Cuba y se analiza en profundidad en dos municipios de la capital.

La relación entre ingresos y educación es abordada en uno de los trabajos revisados, donde se plantea que el acceso a la educación superior se encuentra mediado por el acceso a recursos monetarios que garanticen repasadores para exámenes de ingresos y asignaturas complejas de cada carrera (García, 2016). Otras dos investigaciones sobre educación consideran que los bajos salarios es una de las causas de que los jóvenes estudiantes no opten por carreras técnicas (Castilla, Domínguez y Quintana, 2010; Estévez y Abadié, 2014).

Sin embargo, y en términos de oportunidad, en el artículo de Pañellas (2015, p.124) se expresa que las acciones que visualizan las personas involucradas en esta investigación para efectuar una transformación desarrolladora son fundamentalmente económicas, donde

la mejoría de los salarios y las condiciones de trabajo son esenciales; además de desarrollar la economía, crean empleos y amplían la inversión extranjera.

El estudio de la seguridad económica de las pensiones mínimas de vejez, desde la óptica de la suficiencia de ingreso, pone en este indicador un peso importante, aunque no el único (Ivonet, 2017). Muestra que los estimados de gastos per cápita son superiores a las prestaciones de la seguridad social y al monto de las pensiones de la asistencia social recientemente aprobado.¹² En esta misma línea otro trabajo alerta que entre las determinantes de la incapacidad del régimen de seguridad social se encuentran los bajos ingresos y su desconexión con el costo de la canasta básica (referido aquí como el Índice de Precios al Consumidor) y a la inflación (Odriozola y Colina, 2017).

Las investigaciones que relacionan las remesas como fuente de ingresos desde el análisis de las desigualdades sociales tampoco han sido profusas. En la revisión bibliográfica se identifican cinco investigaciones y un artículo periodístico. La primera es del 2008 (Barbería, 2008) y revisa diferentes estudios producidos en Cuba sobre este campo. Enfatiza en la contribución de las remesas al incremento de las desigualdades económicas, raciales y territoriales.

Otra de estas investigaciones realizada en el 2013 se propone analizar cómo los factores de género afectan y determinan los vínculos entre remesas y hogares pobres en Cuba, a partir de la revisión de la literatura existente, las políticas y un estudio de caso en un municipio de la capital (Munster, 2013). Revela este estudio la prevalencia de investigaciones que principalmente analizan las remesas en su dimensión económica, sin indagar en la social y que toman, en esencia, a la persona emisora migrante, sin tener en cuenta otras dimensiones como las dinámicas de las familias receptoras. Establece que, si bien las remesas promovieron la reanimación coyuntural de la economía, aumentaron las desigualdades de ingresos y disminuyeron el papel de los salarios entre los ingresos. La relación remesa, género y desigualdad resulta poco abordada en las investigaciones revisadas y fue pertinente en el estudio de caso al develar que las remesas constituyen un elemento habilitador de la toma de decisiones de mujeres que viven en hogares en condición de pobreza. Sin embargo, como la división sexual del trabajo no se modifica, poco aportan en términos de transformación del orden de género por lo que, por sí mismas, no representan una estrategia de desarrollo. El artículo periodístico revisado comenta el trabajo de Munster y añade otras entrevistas que refuerzan las tesis expuestas (González, 2015).

Denisse Delgado ha publicado varios trabajos sobre remesas, familias y trabajo por cuenta propia (Delgado, 2014, 2015, 2017). En ellos la autora aborda la forma en que el uso de las

¹² En septiembre del 2018 se anunció un incremento de las pensiones que se encontraban por debajo del salario mínimo (225 pesos) en 70 pesos. En julio del 2019 se aprobó el aumento de las pensiones de 242 pesos a 280 y el resto de los que cobran pensiones de 242 hasta 499 pesos mensuales, reciben un incremento gradual hasta 500 pesos mensuales.

remesas si bien, por un lado, favorece el desarrollo de iniciativas privadas (maximizan los ingresos familiares, mejoran las condiciones de vida e incrementan la capacidad de consumo); por otro, se estructuran grupos cada vez más heterogéneos que refuerzan desigualdades sociales existentes, al mismo tiempo que generan otras nuevas. Unas familias las utilizan como capital de trabajo, otras como complemento a los ingresos para sobrevivir y obtener consumos cotidianos.

En el trabajo del 2017 la autora señala perfiles sociodemográficos ventajosos y desventajosos de las personas receptoras de remesas: el perfil ventajoso lo presentan quienes reciben capital de trabajo, y dentro ellos, hombres, entre 31-60 años, blancos, con nivel de instrucción medio superior, con iniciativas privadas y residentes en el municipio Plaza de la Revolución. Por su parte, el perfil desventajoso es para quienes reciben remesas de consumo, particularmente, mujeres, menores de 30 años y mayores de 60, mestizas, con nivel de instrucción superior, trabajadoras del sector estatal y residentes en el municipio Centro Habana (Delgado, 2017, p.223). Resulta interesante que en la muestra estudiada existe un diferencial de 11 veces en los montos que reciben las personas que dedican las remesas para capital de trabajo y las que las utilizan para consumo, además, las primeras generalmente se desempeñan en el sector de trabajo por cuenta propia mientras que las segundas, en el sector estatal.

Otras dos aristas en los análisis de las desigualdades económicas son las investigaciones relacionadas con pobreza, exclusión social y grupos vulnerables, así como las que abordan los comportamientos de grupos que logran acumular ciertos niveles de riqueza. En ambas perspectivas, si bien no es la única causa, los ingresos constituyen un indicador relevante.

En los estudios de pobreza se distingue el desarrollado por Mayra Espina y publicado en 2008 que sistematiza las políticas de atención a la pobreza y la desigualdad (Espina, 2008). En este extenso trabajo, la autora revisa las políticas sociales y económicas adoptadas en la crisis de los años 90 y sus efectos en términos de desigualdad, además, realiza propuestas de políticas para garantizar la sostenibilidad de la equidad dentro del modelo socialista cubano. La tesis de maestría de Rosa Voghon (2009) indaga sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza a partir de las condiciones familiares de partida para acceder a la estructura de oportunidades desde su abordaje multidimensional. La jefatura de hogar femenina y negra, un fondo habitacional deteriorado, bajos e inestables ingresos, el abandono escolar, bajo capital relacional, tensiones entre patrones tradicionales y emergentes del orden de género son características de las familias estudiadas.

En esta línea se encuentra la investigación de Ángela Peña (Peña, 2013), quien aborda la reproducción de la pobreza familiar, en dos territorios periféricos urbanos de La Habana,

desde los roles asignados a cada actor del bienestar (Estado, mercado y familias), en las estrategias familiares, y analiza cómo sus formas de relación contribuyen a la reproducción de la pobreza. Las familias estudiadas están limitadas en sus capacidades, debido a la falta de bienes y escasos ingresos junto con la falta de empoderamiento para la toma de decisiones, lo cual se traduce en una falta de proyecto de vida individual, familiar y comunitario. Se evidencia la imposibilidad de estas personas de articularse socialmente de modo beneficioso para sí mismos, y su comunidad. Aunque las redes familiares y comunitarias son las que reaccionan más rápido ante las demandas, estas respuestas no trascienden el nivel de la sobrevivencia y no facilitan la movilidad social. Por tanto, el Estado sigue siendo un actor central en los regímenes de bienestar para estas familias.

Otra de las investigaciones revisadas indaga sobre los rasgos que definen la situación de pobreza de familias con jefatura femenina de hogar en un pueblo de la provincia de Matanzas. Esta encuentra que el bajo nivel escolar, la inestabilidad e informalidad del empleo y los ingresos bajos, así como la maternidad temprana y la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado caracterizan a las familias con jefatura femenina (Mejías, 2013). Desde la psicología, Batista (2014), caracteriza la problemática de la exclusión social en un barrio habanero, que ocurre según la percepción de las personas que allí viven en los ámbitos económicos, políticos, culturales y sociales, además en relación con otros territorios. En este trabajo se concluye que la influencia del nivel económico y las posibilidades de participación social resultan factores claves asociados a los procesos de exclusión social.

También desde la sociología un trabajo indaga sobre los procesos de integración/exclusión social en un consejo popular de un municipio habanero. Los hallazgos encontrados coinciden en gran medida con los anteriores trabajos sobre este tema: deterioro de la infraestructura y espacios de socialización a nivel de barrio y en los hogares, escasas oportunidades de empleo y de vías de ampliación de los ingresos, trabajos informales e inestables, bajos ingresos, bajo nivel educativo y abandono escolar, pocas posibilidades de participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos (Soler, 2015).

En términos de la gestión del hábitat, una investigación realizada en el 2014 estudió las desigualdades socioespaciales en relación con este tema en tres barrios de la ciudad de Santa Clara, los cuales presentan características diferentes. Los resultados arrojaron que existen barrios en desventaja social por estar ubicados en la periferia de la ciudad, que no acceden plenamente a los recursos, oportunidades (sean de carácter igualitario o no) y/o beneficio. Los que están en peores condiciones tiene personas con menores ingresos, menores niveles educativos y trabajos inestables e informales (Anoceto, 2014). En esta misma línea, pero en

2016, otra investigación en un municipio de Villa Clara puso de relieve los “cuellos de botella” para que la población vulnerable pueda rehabilitar o adquirir una vivienda (Barea, 2016).

La otra cara de las investigaciones sobre pobreza son aquellas que se realizan sobre grupos que logran acumular ciertos niveles de riqueza. Como las anteriores, resultan escasas aún en la amplia producción de las ciencias sociales cubanas, probablemente por los matices políticos que ha tenido en el país los procesos de acumulación de bienes materiales y otros recursos. Sin embargo, junto con las investigaciones sobre alto capital económico, cada vez más se encuentran otras que reflejan comportamientos grupales de aquellos que detentan ciertos niveles de riqueza (Pañellas, 2017).

En este sentido, una investigación pionera en este campo relaciona procesos de segregación urbana en barrios de La Habana como expresión de la forma en que se produce, acumula y redistribuye la riqueza en la sociedad, desde una perspectiva histórica (Núñez y Olivares, 2008). Señalan los autores que el caso cubano ha tenido aciertos al mitigar la segregación geográfica mediante la integración de políticas, instrumentos y medidas que sistemáticamente tienden al bienestar y la calidad de vida de las personas. Sin embargo, las reformas asociadas a la crisis de la década de los 90 y las políticas e instrumentos con exceso de verticalidad y falta de participación, marcan una etapa en que ha comenzado a producirse una redistribución residencial de la población con capacidad de pago frente a otra que se ubica en las zonas intermedias y periféricas de la ciudad, donde existen desbalances en los servicios y ofrecen menos oportunidades de desarrollo e interconexión. Estas diferencias en los niveles de acceso a la vivienda se han reforzado en la última década, sobre todo respecto a la zona centro-litoral oeste, donde se han realizado mayores inversiones.

Las investigaciones examinadas sobre el sistema tributario e impositivo (Vázquez, 2013; Pons, 2013; Sarduy, Pons y Traba, 2015; García, 2016) lo sitúan como causa de inequidad en dos sentidos: por un lado, los impuestos afectan en mayor medida a las personas y negocios de menores ingresos porque la mayor proporción de impuestos son de carácter indirecto. Por otra parte, no logran su efecto redistributivo, pues existe un gran número de exenciones.

Los estudios analizados sobre la salud, los ingresos, la producción mercantil en pesos —dentro de la dimensión socioeconómica a nivel familiar o provincial— y la condición socioeconómica percibida, representan indicadores que correlacionan con el nivel de salud alcanzado, aunque existen diferentes posiciones al respecto. Se revisaron tres trabajos que concluyen sobre la existencia de bajas tasas de relación entre factores económicos y de salud (Díaz-Perera, Bacallao y Alemañy, 2012, 2014), mientras que otras tres ofrecen pistas que relacionan estas dos dimensiones, donde los factores económicos funcionan como un predictor

de peores condiciones de salud en enfermedades específicas como la lepra (Moreira, Moreno, Sotolongo, Rivera y Carballea, 2014), la hipertensión arterial, la mortalidad materna, la tuberculosis, y las enfermedades de transmisión hídrica y por vectores (Álvarez y otros, 2014). La percepción sobre la situación socioeconómica también guarda estrecha relación inversa con la hipertensión (Díaz-Perera, Bacallao y Alemañy, 2014).

Otro estudio relevante que se relaciona con este tema es el que aborda la mortalidad en Cuba, el cual encuentra que las condiciones socioeconómicas se hallan estrechamente relacionadas con los patrones de mortalidad por color de la piel, donde la población no blanca y especialmente la femenina, rural y los menores de un año tienen menores posibilidades de sobrevivencia (Albizu-Campos, 2008).

En las investigaciones examinadas sobre identidad y dinámicas grupales (Rabassa, 2008; Ruz y Orta, 2009; Domínguez, 2009; Pañellas, 2012; Curbelo, 2012; Dujarríc y Vázquez, 2015; Palay, 2016) o socio-ocupacional (Ortega, 2010; Tomé, 2014; López, 2013; Pañellas y Blanco, 2017), los niveles de ingresos y de activos materiales moldean las identidades y dinámicas grupales, la movilidad social y la dinámica socio-ocupacional, así como las relaciones de pareja, por lo que son reconocidos como causales de estas configuraciones.

Dos de las investigaciones que abordan las desigualdades territoriales consideran como una de sus causas las diferentes oportunidades para generar ingresos que se perciben entre territorios (Íñiguez, 2015), muy relacionadas con su herencia histórica.

Las desigualdades económicas se perciben como consecuencia en el análisis de los efectos de un grupo de determinantes microeconómicos en los ingresos monetarios per cápita de las familias (Rosales, 2008). También se revisaron dos trabajos que analizan los cambios en la política de empleo desde 2008 y consideran que procesos como el redimensionamiento del aparato estatal afecta los ingresos de aquellas personas que quedan disponibles (Echevarría, Díaz y Romero, 2015; Mercader, 2015).

A nivel de Latinoamérica, uno de los estudios a los que se accedió da cuenta de que la economía cubana ha acumulado brechas negativas en sus ingresos en relación al promedio de la región, por la menor acumulación de capital físico y, en segundo lugar, por la menor productividad y el menor crecimiento de la fuerza de trabajo (Vidal, 2017).

Asimismo, las menores oportunidades de mejoras salariales y de ingresos se asocia como consecuencia al acceso y completamiento de los estudios, principalmente universitarios, problemática que se refleja en dos trabajos de este campo (Barrios, 2010; Tejuca, Gutiérrez y García, 2015). El trabajo de Peña y Vohgon (2013), muestra que el monto y la seguridad de los

ingresos se asocia a la situación de empleo/trabajo que se detente: informal, estatal, trabajador por cuenta propia y trabajador disponible.

En esta misma línea, uno de los textos revisados apunta que las desigualdades en el mercado de trabajo se encuentran condicionadas por las diferentes posibilidades que tienen las personas de acceder a determinados empleos (Rojas, 2017). Estas posibilidades están constreñidas a su condición de habitante legal o ilegal, así como a la tenencia o no de activos de partida (casas, autos, bienes de producción) y redes de información (Rojas, 2015; Rodríguez, 2018).

Problemáticas similares para cuatro comunidades en Marianao, son señaladas por Gómez y otros, (2017). Este resultado de investigación destaca, además, los efectos de las transformaciones en materia de empleo en la vida de estas personas, luego de la pérdida de las dos principales fuentes de empleo (el Central Martínez Prieto y el cierre del organopónico), así como la incapacidad de las pensiones para cubrir los costos de la vida. Por ello muchas personas jubiladas deben trabajar (revender, hacer trabajos de reparaciones, recoger materia prima hasta mendigar) para obtener ingresos extras (Gómez y otros, 2017, p.31).

Resulta interesante que uno de los trabajos analizados valora el aporte de un proyecto sociocultural en el mejoramiento de las condiciones de vida de una parte de la población, a partir de la generación de ingresos familiares y para la comunidad (Campos, 2017).

El acceso a diferentes empleos y trabajos y sus ingresos asociados constituye una causa de las desigualdades que se refleja en varias investigaciones. Entre ellas (Parra, 2018; Díaz y Echevarría, 2015; Rojas, 2011; Echeverría, Lara y García, 2010) comentan diferentes perfiles sociodemográficos y dinámicas locales para lograr acceder a trabajos remunerados y al sector de trabajo por cuenta propia. Desde el propio acceso se verifican estas desigualdades. Un ensayo que aborda de forma tangencial este tema es el realizado por Georgina Alfonso sobre los desafíos del feminismo socialista del siglo XXI (Alfonso, 2012).

Otras dos investigaciones dan cuenta de que la forma en que está diseñada la escala salarial, tendiente al igualitarismo, resulta injusta e inefectiva para promover los mejores desempeños y un mejoramiento de los ingresos (Galtés, 2017). Una de las investigaciones hace referencia a la heterogeneidad productiva y su efecto en el aumento de las diferencias en la distribución de ingresos (González, 2015).

La cultura del rebusque, prácticas encaminadas a generar ingresos, que están inscritas de forma estable y normalizada en los comportamientos de determinados grupos es una de las problemáticas abordada en uno de los trabajos por Rodríguez, (2014). Otra investigación

realizada en la Ciénaga de Zapata señala que la conjunción entre tradiciones de caza y pesca del cenaguero, y la necesidad de practicarlas como alternativas para su alimentación, resultan una alternativa legitimada para obtener ingresos por vías ilegales (Hernández, Núñez, Rodríguez y Rojas, 2008).

Como se observa, existe una producción científica que valora la desigualdad económica como causa o consecuencia de la desigualdad social, aun cuando no siempre los autores y las autoras parten de este marco analítico. Este comportamiento, en parte, condiciona el hecho de que no siempre se revelan brechas de equidad¹³ en las investigaciones. También la perspectiva multidimensional de la desigualdad (muy utilizada en la mayoría de los trabajos revisados) provoca que, por lo general, se identifiquen diversas brechas que se refuerzan por su carácter interseccional y delimitan claramente los extremos resultantes.

Brechas de equidad identificadas

Las brechas identificadas y que se relacionan con la dimensión sistematizada se pueden resumir en¹⁴:

- *Brecha de ingresos*: Varios trabajos evidencian diferencias significativas en los ingresos que se mantienen en el tiempo y que se encuentran principalmente relacionadas con:
 - » Género: las mujeres por lo general tienen menos ingresos (Díaz y Echevarría, 2015; Galtés, 2017), invierten las remesas en el consumo, mientras que los hombres las utilizan como capital de trabajo (Delgado, 2017, 2015) y se encuentran en condición de jefatura de hogar femenina especialmente en hogares en condición de pobreza (Alfonso, 2012; Barbería, 2008). Además, sufren la brecha digital (Domínguez, Rego, García y Moretón, 2012) y dedican mayor cantidad de tiempo al trabajo doméstico no remunerado y de cuidado (Castañeda, 2018).
 - » Etarias: las personas mayores y los más jóvenes tienen menores ingresos, ya sean pensiones o salarios que limita su autonomía económica (Estévez y Abadié, 2014; Ivonet, 2017; García y Anaya, 2015; Rabassa, 2008; Odriazola y Colina, 2017).

¹³ Para los efectos de este trabajo, se entiende por brecha de equidad aquella diferencia que emerge al comparar el estado de equidad deseado o posible y el desempeño real en un momento dado, respecto a uno o más puntos de referencias seleccionados (variables cualitativas, cuantitativas) o diferentes ámbitos (internacional, nacional, regional, local) y perspectivas de análisis (género, territorio, color de la piel, grupo de edad, nivel de instrucción, entre otros) y esta diferencia se mantiene en el tiempo. La brecha siempre es relacional.

¹⁴ Se citan algunos de los trabajos que las refieren.

- » Color de la piel: por lo general las personas no blancas tienen peores ingresos y las personas negras son mayoría entre las que se encuentran en condición de pobreza (Domínguez, 2010; Ramírez, 2013, Soler, 2015; Voghon, 2009; Peña, 2013; Zabala, 2009).
- » Territorio: las personas que viven en zonas rurales tienen menos oportunidades de obtener ingresos y ampliar las vías de obtenerlos, así como los grupos vulnerables tienen peores condiciones de hábitat (Hernández, Núñez, Rodríguez y Rojas, 2008; Rojas, 2015; Íñiguez, 2015; Núñez y Oliveras, 2008; Anoceto, 2014; Barea, 2016).
- » Ocupación: las personas ocupadas en el sector no estatal tienen mayores ingresos que las que lo hacen en el sector estatal. (Llopiz, 2008; Echevarría, Díaz y Romero, 2015).

- *Brecha en el consumo*: relacionada tanto con el acceso a productos alimenticios y de canasta básica como a productos culturales (Morales, 2017) y digitales (Domínguez, Rego, García y Moretón, 2012). Esta brecha se observa tanto en el acceso como en la accesibilidad.
- *Brecha en el acceso y el uso de bienes duraderos y no monetarios*: las personas y familias de bajos e inestables ingresos tienen menos bienes duraderos y viven en condiciones donde los bienes no monetarios (agua, alcantarillado, vivienda, etc.) tienen un peor comportamiento (Echevarría, Gabriel, Romanó y Schettino, 2018).
- *Brecha en salud*: En familias con pocos recursos económicos se observa una mayor predisposición a padecer enfermedades como la lepra (Díaz-Perera, Bacallao y Alemañy, 2014), la tuberculosis y la hipertensión (Bacallao, Díaz-Perera y Alemañy, 2012). Al mismo tiempo se evidenció una sobremortalidad para las personas negras, mujeres, menores de un año y que viven en zonas rurales (Albizu-Campos, 2008).
- *Brecha en educación*: las personas que acceden y se gradúan de la educación superior por lo general son hijos e hijas de dirigentes y profesionales (Tejuca, Gutiérrez y García, 2015). Las familias con ingresos bajos enfrentan mayores dificultades para invertir en la educación de los hijos. Son ellas las que presentan mayores indicadores de abandono escolar en educación básica.
- *Brecha en participación*: en los extremos de la dimensión económica se encuentra una menor participación en la toma de decisiones sobre problemas colectivos (Gómez y otros, 2017; Batista, 2014).

Propuesta de políticas según estudios

No todos los trabajos revisados realizan propuestas de políticas, menos aún propuestas concretas para disminuir la desigualdad económica. Aquellos que lo hacen se encuentran alrededor de seis ejes fundamentales:

De orden investigativa:

- Ampliar los estudios realizados y las investigaciones sobre el tema, pues muchos trabajos se basan en estudios de caso.
- Ampliar las perspectivas de análisis hacia enfoques multidimensionales y transdisciplinarios.

Capacitación-formación:

- Trabajar con actores que intervienen en los procesos estudiados y/o con los grupos analizados para sensibilizar sobre el tema y transformar la realidad.

Para la difusión:

- Difundir los resultados obtenidos para sensibilizar a las personas tomadoras de decisiones.
- Devolver los análisis a las personas interesadas.

Evaluación y monitoreo de los efectos e impactos:

- Monitorear los efectos a corto plazo y los impactos que tienen en la sociedad las políticas económicas y sociales implementadas, para poder corregir los efectos no deseados en su implementación.

Articulación de actores y de políticas:

- Articular diferentes actores y planos de análisis (local, municipal, provincial y nacional) así como sectores de propiedad y gestión (estatal, cooperativo y privado) para abordar las desigualdades existentes, tanto desde el diagnóstico como desde la propuesta integral de soluciones.
- Combinar políticas universales con políticas focalizadas, a nivel local, que permitan atender la diversidad de situaciones.

Propuestas específicas

Si bien algunos trabajos realizan propuestas específicas para mitigar las desigualdades económicas que han sido diagnosticadas, como tendencia son muy generales y no siempre especifican los actores que deben hacerse cargo ni los tiempos para su implementación. Estas recomendaciones van desde acciones generales a nivel de políticas hasta políticas activas para promover el mejoramiento de las condiciones de vida de grupos que han quedado rezagados, como mujeres y personas no blancas. A continuación, se mencionan un grupo de estas propuestas.

Generales:

- Recuperar las funciones del salario en el sector público, que generan un espectro que va desde la descentralización de la política salarial, pasando por la recuperación del salario mínimo en el sector público (ajustado al costo de una canasta básica e indexados a la inflación), entre otros (Odriozola y Colina, 2017).
- Promover la contribución de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMES) a la creación de empleo, e impulsar medidas tales como: el acceso a un crédito asequible que les permita asegurar un entorno favorable para su desarrollo, facilidades para la capacitación empresarial y el desarrollo de competencias, entornos normativos favorables, entre otras (Rosales y Esquenazi, 2017).

Creación de empleos:

- Fomentar empleos para mujeres en el plano operativo sin abandonar el plano estratégico para modificar la división sexual del trabajo al interior de las familias y de las organizaciones (Echevarría, Lara y García, 2010).
- Favorecer la generación de nuevas fuentes de empleo mediante la autogestión social en la recuperación de espacios y servicios comunitarios que se encuentran actualmente inutilizados y han sido declarados como recursos potenciales (Beltrán y Serrano, 2010).
- Situar bancos de información sobre posibilidades reales de empleo y servicios a nivel municipal con énfasis en los asentamientos rurales de difícil acceso (Rojas, 2015).
- Concebir una oficina de activos con incentivos y condiciones favorables para personas de asentamientos rurales, acorde con las posibilidades reales del lugar donde habitan y sus potencialidades endógenas (Rojas, 2015; Vallellano, 2017).

- Elevar la concentración de la inversión pública —generadora de nuevos empleos— en los territorios donde se observen las mayores tasas de desocupación. Estas inversiones deberán tener un alto componente destinado a la contratación de mano de obra (Rosales y Esquenazi, 2017).

Fomento de políticas productivas:

- Impulsar programas que permitan la modernización de la actividad productiva expresados en proyectos específicos de desarrollo tecnológico, con inversiones importantes en ciencia y tecnología y el fortalecimiento de la comunidad científica nacional (Rosales y Esquenazi, 2017).

Ampliación de servicios de cuidado:

- Gestionar servicios de guardería infantil para facilitar la posibilidad de que las mujeres sean idóneas en sus respectivos centros laborales.

Cobertura del servicio de pensiones:

- Exigir para las mujeres menos años acreditados de servicio, teniendo en cuenta la tendencia a entrar y salir con más frecuencia del trabajo asalariado. Existen múltiples instrumentos para hacer más integrales las políticas en este sentido, por ejemplo, exenciones fiscales a las mujeres embarazadas o cuidadoras, subsidios gubernamentales directos, o incluso puede valorarse la disminución de los años extra requeridos para acceder a la jubilación, por cada hijo (Odriozola y Colina, 2017).

Fomento de espacios de recreación y ocio:

- Crear y fomentar el desarrollo de espacios de recreación y ocio, saludables y asequibles para la población, donde se pueda aprovechar las habilidades de las personas de la comunidad.

Fomento de espacios de participación:

- Estos espacios son concebidos como lugares donde se pueda conocer en profundidad la heterogeneidad de la sociedad cubana, a la vez que habiliten a las personas para hacer propuestas de soluciones a sus problemáticas; al mismo tiempo pueden generar un mecanismo de monitoreo sobre la implementación de estas acciones.

Referencias bibliográficas

- Albizu-Campos, J. C. (2008). Contrapunteo cubano de la muerte y el color. *Revista Novedades en Población*. 4 (7) pp.74-226.
- Alfonso, G. (2012). Ética y política desde el Movimiento de Mujeres. Desafíos del feminismo socialista del Siglo XXI. *Paradigmas Emancipatorios*. Instituto de Filosofía.
- Álvarez, E., y Mattar, J. (2004). *Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo XXI*. CEPAL/ INIE/ PNUD.
- Álvarez, A. G., Luis, I., Maldonado, G., Romero, M., Bonet, M., Lage, C., Van der Stuyft, P. (2014). Evidencias actuales en las propuestas de intervención local para el estudio y manejo de los determinantes sociales de la salud en la población cubana. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología*. 52(2). 239-262.
- Anaya, B., y García, A. (24 de septiembre de 2018). *Salud pública y educación en Cuba*. Presentación realizada a profesores adiestrados de la Universidad de La Habana.
- Anoceto, A. (2014). *Santa Clara: estudio de desigualdades socioespacial en relación a la gestión del hábitat*. Santa Clara (Tesis de diploma). Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Central de las Villas Marta Abreu
- Barbería, L. (2008). Remesas, pobreza y desigualdad en Cuba. *Revista Espacio Laical*. pp.18-21.
- Barea, L. (2016). *Recomendaciones para la Línea Estratégica de Gestión del Hábitat en el municipio de Sagua La Grande*. (Tesis de diploma). Facultad de Construcciones. Universidad Central de Las Villas Marta Abreu.
- Barrios, M. (03 de marzo de 2010). Después de la secundaria ¿qué estudiaremos? *Juventud Rebelde*. p.7.
- Batista, P. (2014). *¿Todod el mundo cuenta? Percepción de la exclusión social en el barrio Pilar-Atarés*. La Habana. (Tesis de diploma). Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.
- Beltrán, A. y Serrano, R. (2010). *Desvinculación Juvenil: Un diagnóstico comunitario en Buenavista*. La Habana. (Tesis de diploma). Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.
- Campos, Y. (2017). *El proyecto comunitario "AfroAtenas. Callejón de las Tradiciones": un estudio sobre su impacto social*. (Tesis de maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Universidad de La Habana.
- Castañeda, A.V. (2018). *¿Quién cuida en la ciudad? Oportunidades y Propuestas en los municipios de Boyeros y Guanabacoa (La Habana)*. CEPAL-PNUD.
- Castilla, C., Domínguez, M.I. y Quintana, D. (2010). *Orientación Profesional de los estudiantes universitarios hacia el trabajo científico-técnico en Cuba*. CIPS.

- Cobas, M. (2010). *La investigación-acción en la atención de las personas con discapacidad en las Repúblicas de Cuba y Bolivariana de Venezuela*. (Tesis de doctorado). Escuela Nacional de Salud Pública.
- Colectivo de autores. (2010). *La familia cubana en el parteaguas de dos siglos*. D'vinni SA.
- Cristóbal, D.; Domínguez, M.I. y Domínguez, D. (2003). *La integración social de la juventud en Ciudad de La Habana*. CIPS.
- Curbelo, L. (2012). *Ser cuentapropista hoy: relación entre identidad y movilidad social*. (Tesis de diploma). Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.
- Delgado, D. (2014). *Dinámica familiar, trabajo por cuenta propia y remesas. Estudio de casos en familias del barrio capitalino El Vedado, Cuba*. CIPS.
- Delgado, D. (2015). Entre el desarrollo y la desigualdad: Familias cubanas receptoras de remesas con iniciativas privadas. *Mundi Migratios*. pp.51-73.
- Delgado, D. (2017). Efectos del uso diferenciado de las remesas en la desigualdad social. Un estudio en la capital cubana. Colectivo de Autores. *Nuevas diferencias: desigualdades persistentes en América Latina y el Caribe*. CLACSO. pp.187-234.
- Díaz, I. y Echevarría, D. (2015). Mujeres emprendedoras en Cuba: un análisis imprescindible. Villanueva, O.P. y Torres, R. *Miradas a la Economía Cubana: análisis del sector no estatal*. Editorial Caminos. pp.145-158.
- Díaz-Perera, G., Bacallao, J. y Alemañy, E. (2012). Relación entre la dimensión socioeconómica y la dimensión salud en familias cubanas. *Revista Cubana de Salud Pública*. (38). pp.403-413.
- Díaz-Perera, G., Bacallao, J. y Alemañy, E. (2014). Contexto, percepción de la situación económica y cifras de la tensión arterial. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología*. 52 (1). pp.15-28.
- Domínguez, M.I. Cristóbal, D. y Domínguez, D. (2000). *La integración y desintegración social de la juventud cubana a finales de siglo. Procesos objetivos y subjetividad juvenil*. (Informe de investigación). CIPS.
- Domínguez, M.I.; Cristóbal, D. y Domínguez, D. (2002). *Subjetividad e integración social de la juventud cubana*. (Informe de investigación). CIPS.
- Domínguez, M.I.; Domínguez, D. y Cristóbal, D. (2004). *Subjetividad e identidad de la juventud cubana*. (Informe de investigación). CIPS.
- Domínguez, M.I. (2009). *La juventud de Ciudad de la Habana: la conformación de identidades*. CIPS.
- Domínguez, V.E. (2010). *Aproximación a la caracterización sociopsicológica de familias portadoras de bajo capital cultural y económico*. (Tesis de diploma). Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.
- Domínguez, M.I.; Rego, I., García, F. y Moretón, Y. (2012). *Los medios de comunicación masiva y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Su papel en la socialización de adolescentes y jóvenes*. CIPS.
- Domínguez, M.I., Catilla, C. y Rego, I. (2013). *Políticas Públicas de Juventud e inclusión social: El caso de Cuba*. Resultado de investigación elaborado para GT CLACSO Juventud - UNESCO- CIPS.
- Dujarríc, G. y Vázquez, M. (2015). *Identidad social de un grupo de altos ingresos económicos*. (Tesis de diploma). Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.
- Echevarría, D., Lara, T., y García, M. (2010). Empleo femenino en zonas rurales: logros y retos de los proyectos de desarrollo. *Seminario Anual del Centro de Estudios de la Economía Cubana*. CEEC.
- Echevarría, D., Díaz, I., y Romero, M. (2015). Política de empleo en Cuba 2008-2013: desafíos a la equidad en Artemisa. Colectivo de Autores. *Economía cubana: transformaciones y desafíos*. Editorial de Ciencias Sociales.
- Echevarría, D., Gabriel, A., Romanó, S., y Schettino, F. (2018). Wealth distribution in Cuba (2006-2014): a first assessment using microdata. *Cambridge Journal of Economics*.
- Escandell, V. (2006). *La Batalla de Ideas: fundamento estratégico para el desarrollo de una economía del conocimiento en Cuba*. www.rebellion.org/docs/145614.pdf
- Espina, M. (2011). *La cuestión social en Cuba contemporánea*. Center for Latin American Studies.
- Espina, M. (2011). *La política social en Cuba: resultados y retos*. Washington: Center for Latin American and Latino Studies.
- Espina, M. (2012). Retos y cambios en la política social. Vidal, P. y Pérez, O.E. *Miradas a la economía cubana: El proceso de actualización*. Editorial Caminos. pp.159-172.
- Espina, M. (2008). *Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana*. CLACSO.
- Espin, M., Núñez, L., Martin, L., Togores, V., Espina, R., Rodriguez, A. y Ángel, G. (2008). *Equidad y movilidad social en Cuba. Impactos del reajuste estructural*. CIPS.
- Estévez, K.R. y Abadie, L. (2014). Continuidad de estudios. Realidades y desafíos en Cuba. *Revista Estudio*. (16). Enero-junio. pp.4-14.
- Esquenazi, A. y Rosales, S. (2017). Determinantes de la participación laboral en Cuba. *Revista Economía y Desarrollo*. 158 (2) .pp.169-188.
- Fernández, F. (2015). Apuntes sobre la idea de prosperidad en la Cuba actual. *Catauro. Revista Cubana de Antropología*(32). pp.51-54.
- Ferriol, A.; Ramos, M. y Añé, L. (2004). *Reforma económica y población en riesgo*. INIE-CEPDE-ONE.
- Galindo, M., y Ríos, V. (2015). Desigualdad. México ¿cómo vamos? *Serie de Estudios Económicos*. pp.1-18.
- Galtés, I. (2017). *Aportes para un rediseño de la política salarial en el contexto de la actualización del modelo económico y social*

- cubano. (Tesis de doctorado). Facultad de Economía. Universidad de La Habana.
- Galtés, I. (2017). Desigualdad de ingresos en Cuba. ¿Qué papel juegan los salarios? Torres, R. y Echevarría, D. *Miradas a la economía cubana. Un acercamiento a la "actualización" seis años después*. Casa Ruth Editorial. pp.81-93.
- García, A., y Anaya, B. (2007). Política social en Cuba, nuevos enfoques y programas recientes. *Publicaciones 2006-2007 CD*. CEEC. pp.1-53.
- García, A. y Anaya, B. (2015). Gastos básicos de una familia cubana urbana en 2011. Situación de las familias "estado-dependientes". Zabala, M.d.C; Echevarría, D.; Fundora, G. y Muñoz, M.R. *Retos a la equidad social en la actualización del modelo económico*. Editorial de Ciencias Sociales. pp.84-114.
- García, Y. (2014). *Las desigualdades socioestructurales y el cuentapropismo en Santa Clara: una aproximación sociológica*. (Tesis de Diploma). Sociología. Universidad Central de las Villas Marta Abreu.
- García, T. (2015). Dialogando sobre el desarrollo y la prosperidad en Cuba. *Catauro. Revista Cubana de Antropología*. pp.42-50.
- García, M.A. (2016). *Las retenciones y los impuestos al salario en Cuba. 1959-2016. Análisis crítico*. (inédito). NY.
- García, R. (2016). Desigual en el acceso a la educación superior en función de los ingresos familiares. *Cuba Posible: La educación superior cubana en tiempo de reformas*. pp.55-65.
- Gómez, E. (2015). *Fundamentos para una praxis profesional de trabajo social en Cuba*. (Tesis de doctorado). Universidad de Camagüey-CIPS.
- Gómez, E., Braffo, N., Rodríguez, A.D., Espina, M., Pardini, S., Soler, C. y Cruz, M. (2017). *Política social y equidad a escala comunitaria en el contexto de la actualización. Un estudio de casos en el municipio Marianao*. CIPS.
- González, L. (2013). *Apropiación de la política cultural según estructura de las desigualdades*. (Tesis de diploma). Departamento de Sociología. Universidad de La Habana.
- González, R. (2015). Contribución al análisis de la heterogeneidad productiva en Cuba. *Economía y Desarrollo*. (153). pp.126-140.
- Hernández, J.L., Nuñez, L., Rodríguez, A., y Rojas, M. (2008). *Informe para diagnóstico social rápido Ciénaga de Zapata*. CIPS.
- Hidalgo, V. (2011). *Estudio de la subjetividad familiar*. (Tesis de diploma). Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.
- Infante, Y. (2009). *Consumo de dramatizados y estrategias de movilidad social ascendente en Cuba. Una aproximación desde la Sociología*. (Tesis de diploma). Departamento de Sociología. Universidad de La Habana.
- Íñiguez, L. (2015). Complicidad del espacio geográfico en la desigual distribución del sector no estatal en Cuba. Pérez, O.E y Torres, R. *Miradas a la Economía Cubana: el sector no estatal*. Editorial Caminos. pp.129-143.
- Íñiguez, L. (2015). Trayectorias y transformaciones territoriales en la Cuba actual. *Geosp - Espaço en Tempo (Online)*. 19.(2). pp.212-227.
- Ivonet, M. (2017). *Gestión pública de la seguridad económica de las pensiones mínimas de vejez*. (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente.
- Kessler, G. (2015). *Controversias sobre la desigualdad. Argentina, 2003-2013*. Fondo de Cultura Económica.
- Llopiz, A. (2008). *Cuba, estructura social, desigualdades y política salarial*. (Tesis de diploma). Departamento de Sociología. Universidad de La Habana.
- López, Y. (2013). *Malestares subjetivos asociados a la identidad genérico-profesional de mujeres y hombres dirigentes*. (Tesis de diploma). Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.
- Mangela, G. (19 de febrero de 2017). Nos toca hablar de salario, pero vinculado a la creación de riquezas. *Periódico Trabajadores* <http://www.trabajadores.cu/20170219/consolidan-invulnerabilidad-militar-apoyo-la-clase-trabajadora/>
- Martin, J.L.; Capote, A., Pérez, A.; Candelé, I., y Campos, J.C. (2003). *Reajuste y trabajo en los '90*. La Habana. CIPS.
- Mazeira, Z. (2011). *Estudio del Bienestar Social de las familias: el caso de la provincia de Cienfuegos*. (Tesis de doctorado). Facultad de Economía. Universidad de La Habana.
- Mejías, D. (2013). *Jefatura femenina en familias con situación de pobreza*. (Tesis de diploma). Departamento de Sociología. Universidad de La Habana.
- Mercader, J.R. (2015). Las últimas reformas laborales. Cuba (2009-2014). *Congreso de Derecho Laboral*. Universidad Carlos III. pp.1-28.
- Morales, E. (2017). Juventud y desigualdades en la cultura. *II Taller Problemas teóricos y metodológicos en el estudio de las desigualdades*. ICIC Juan Marinello.
- Moras, P.E. y Rivero, Y. (2017). Dimensión cultural de las desigualdades sociales. Reflexiones desde experiencias investigativas. *II Taller Internacional sobre Metodologías para el estudio de las desigualdades*. ICIC Juan Marinello.
- Moreira, I., Moreno, E N., Sotolongo, A., Rivera, A. y Carballea, Y. (2014). Enfoque de los factores de riesgo de la lepra con las determinantes sociales de la salud. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología*. 52 (1). pp.4-14.
- Munster, B. (2013). *Remesas y pobreza desde una perspectiva de género. El caso del Consejo Popular de Santa Fe*. CLACSO.
- Nuñez, R. y Oliveras, R. (2008). ¿Habrà razón que guarde el equilibrio? Reflexiones sobre la segregación urbana en La Habana, políticas, instrumentos y resultados. *Revista Catauro*. pp. 5-31.
- Ocampo, D. (2017). Una mirada a la desigualdad desde el análisis del discurso de la narrativa para niños. *II Taller Internacional sobre Metodologías para el estudio de desigualdades*. ICIC Juan Marinello.
- Odrizola, S., y Colina, H. (2017). El sistema de pensiones de la Seguridad Social en Cuba:

- retos actuales. Echevarría, D. y Martín, J.L. *Cuba: Trabajo en el siglo XXI. Desafíos y propuestas*. ICIC Juan Marinello.
- ONEI. (2014). *Anuario Estadístico de Cuba*. ONEI.
- ONEI. (2018). *Anuario Estadístico de Cuba, 2017*. ONEI.
- Ortega, Z. (2010). *Equidad ¿Utopía o realidad factible? Estudio de las relaciones de género en los vínculos amorosos de mujeres con proyectos de desarrollo profesional*. (Tesis de diploma). Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.
- Palay, G. (2016). *Identidad social de un grupo de bajos ingresos económicos*. (Tesis de diploma). Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.
- Pañellas, D. (2012). *Grupos e identidades en la estructura social cubana*. (Tesis de doctorado). Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.
- Pañellas, D. (2015). Reconfiguración de relaciones sociales: pistas desde cuentapropistas capitalinos. Pérez, O.E. y Torres, R. *Miradas a la economía cubana: el sector no estatal*. Editorial Caminos. pp.115-126.
- Pañellas, D. (2015). Tener dinero en Cuba. *Catauro. Revista Cubana de Antropología*. pp.30-41.
- Pañellas, D. (2017). Cuentapropistas de altos ingresos ¿malvados? Echevarría, D. y Martín, J.L. *Cuba: trabajo en el siglo XXI. Propuestas y desafíos*. ICIC Juan Marinello. pp.143-166.
- Pañellas, D. y Blanco, Y. (2017). El desarrollo sostenible en Cuba: la contribución del cuentapropismo en áreas protegidas. Borrás, F. y Ricárdez, J. *Equidad y Desarrollo. Oportunidades y desafíos* Universidad Veracruzana. pp. 114-128.
- Pañellas, D., Arango, L., y Rosales, M.T. (2018). Conceptualización de Bienestar y Prosperidad en actores laborales y no laborales. *IV Taller de Estudios del Trabajo*.
- Parra, C. (2018). Un perfil socio-demográfico de los que buscan empleo en el sector privado en las oficinas municipales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. *IV Taller de Estudios del Trabajo*. CIPS-CEEC-CEDEM.
- Peña, A. (2013). *La reproducción de la pobreza en territorios periféricos de La Habana. Lecturas desde la óptica de los regímenes de bienestar en el contexto cubano actual*. (Tesis de doctorado). Departamento de Sociología. Universidad de La Habana.
- Peña, A., y Voghon, R. (2013). *La reconfiguración de la Política de Empleo y Seguridad Social: horizontes para pensar la relación igualdad-ciudadanía en el contexto cubano actual*. CLACSO-ASDI.
- Pons, S. (2013). Hacia una nueva fiscalidad en Cuba. Pérez, O.E. y Torres, R. *Miradas a la economía cubana: Entre la eficiencia económica y la equidad social* Editorial Caminos. pp.41-56.
- Oxfam. (2014). *Iguales. Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas. Resumen ejecutivo*. Oxford. Oxfam Internacional.
- Oxfam. (2015). *Justicia fiscal para reducir la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe*. Oxford. Oxfam Internacional.
- Oxfam. (2015). *Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina*. Oxford. Oxfam Internacional.
- Oxfam-CEPAL. (2016). *Tributación para un crecimiento inclusivo*. Oxfam.
- Rabassa, Y. (2008). *Un acercamiento al estudio de la identidad social en jóvenes universitarios*. (Tesis de diploma). Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.
- Ramírez, D. (2013). *Capital social y familias pobres. Un acercamiento al carácter dual de este recurso en el barrio Luyanó Moderno*. (Tesis de diploma). Departamento de Sociología. Universidad de La Habana.
- Rodríguez, J.L. (23 de diciembre de 2005). Se ha iniciado una nueva etapa de la Revolución. Informe sobre los resultados económicos y sociales para 2006, ante ANPP. Periódico *Granma*.
- Rodríguez, P. (2014). Cultura del rebusque en Cuba. *Revista Catauro*. pp.186-204.
- Rodríguez, P. (2018). ¿Quiénes buscan empleos en las oficinas municipales del MTSS? *IV Taller de Estudios del Trabajo*. CIPS-CEEC-CEDEM.
- Rojas, J. (2011). *Territorio y población en el redimensionamiento de la industria azucarera*. (Tesis de diploma). Facultad de Geografía. Universidad de La Habana.
- Rojas, M. (2015). *Influencia de los activos de partida en las desigualdades ocupacionales en la comunidad rural El Granizo, Cienfuegos, Cuba*. CLACSO.
- Rojas, M. (2017). Aproximaciones a las desigualdades en el mercado de trabajo en Cuba desde experiencias prácticas actuales. Echevarría, D. y Martín, J.L. *Cuba: trabajo en el siglo XXI. Propuestas y desafíos*. ICIC Juan Marinello. pp.111-142.
- Romanó, S. (2012). *Commercial circuits and economic inequality in Cuba*. (Tesis de doctorado). Universidad de Torino.
- Rosales, S. (2008). *Determinantes de los Ingresos Monetarios de los hogares en Cuba. Un estudio econométrico*. (Tesis de maestría). INIE-Facultad de Economía. Universidad de La Habana.
- Rosales, S. (2017). *Distribución del ingreso en Cuba y su desigualdad. Evidencia empírica nacional. Sistematización*. (Inédito).
- Rosales, S., y Esquenazi, A. (2017). Panorama laboral en Cuba. Diagnóstico de brechas. Echevarría, D. y Martín, J.L. *Cuba: Trabajo en el siglo XXI. Propuestas y desafíos*. ICIC Juan Marinello. pp. 71-110.
- Rutstein, S. O., & Johnson, K. (2004). *The DHS Wealth Index. DHS Comparative Reports* (6). ORC Macro.
- Ruz, Y., y Orta, Y. (2009). *Estudio de la identidad social de un grupo de campesinos como parte de la estructura socioclasista cubana*. (Tesis de diploma). Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.

- Salverda, W., Nolan, B., & Smeeding, T. (2009). *The Oxford Handbook of Economic Inequality* (Primera ed.). Oxford University Press.
- Sarduy, M., Pons, S., y Traba, M. (2015). ¿Por qué evaden impuestos los trabajadores por cuenta propia? Pérez, O.E. y Torres, R. *Miradas a la economía cubana: análisis del sector no estatal*. Editorial Caminos. pp. 93-102.
- Schettino, F., Romanó, S., Echevarría, D., y Gabriel, A. (2018). Distribución del bienestar en Cuba 2011-2014: primera aproximación para Cuba usando microdatos. *III Taller Internacional sobre Metodologías para el estudio de la desigualdad*. ICIC Juan Marinello.
- Sen, A. (1999). *Commodities and Capabilities*. Oxford University Press.
- Soler, C. (2015). *Procesos de exclusión e integración social en la pobreza. Un estudio en el Consejo Popular Luyanó Moderno del Municipio San Miguel del Padrón*. (Tesis de diploma). Departamento de Sociología. Universidad de La Habana.
- Tejuca, M., Gutiérrez, O., y García, I. (2015). El acceso a la educación superior cubana en el curso 2013-2014: una mirada a la composición social territorial. *Revista Cubana de Educación Superior*.(3). pp.42-61.
- Travieso, D. (2010). *Caracterización sociopsicológica de familias portadoras de alto capital económico y bajo capital cultural*. (Tesis de diploma). Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.
- Tomé, C.M. (2014). *Poder y desigualdades económicas en parejas cubanas. Una perspectiva de género*. (Tesis de diploma). Facultad de Psicología. Universidad de La Habana.
- Vallellano, A.F. (2017). *Algunas desigualdades sociales en la juventud del municipio Plaza de la Revolución, en los ámbitos de educación y empleo*. (Tesis de Maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Cuba. Universidad de La Habana.
- Vázquez, M. (2013). *La equidad en el impuesto cubano sobre los ingresos personales*. (Tesina) Universidad de Oriente.
- Vidal, P. (2017). *¿Qué lugar ocupa la economía cubana en la región? Una medición a la tasa PPA de las brechas de ingreso y productividad*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Voghon, R. (2009). *La transmisión intergeneracional de la pobreza: entre el cambio y la reproducción*. (Tesis de maestría). Departamento de Sociología. Universidad de La Habana.
- Ward, P. (2014). Measuring the level and inequality of wealth: an application to China. *Review of Income and Wealth*. Serie 60.(4). pp. 613-635.
- Zabala, M. de C. (2009). *Jefatura de hogar, pobreza urbana y exclusión social: una perspectiva desde la subjetividad en el contexto cubano*. CLACSO.

De la autora

Dayma Echevarría León

Licenciada en Sociología, (1996), Máster en Procesos Gerenciales, (2000), Doctora en Ciencias Sociológicas (2008), por la Universidad de La Habana. Profesora titular en el Centro de la Economía Cubana. Ha coordinado seis proyectos de investigación, de ellos cuatro internacionales. Ha trabajado, además, en procesos de articulación de actores para el desarrollo local. Forma parte del Comité Directivo de la Red de Estudios sobre Desigualdad Social y Movilidad en América Latina (DEMOSAL), de la Red de Estudios del Trabajo en Cuba, de la Red de Política Sociales de la UH y del Grupo de Trabajo de CLACSO *Género, (Des) Igualdades y Derechos en Tensión*. Autora de más de 30 artículos científicos sobre temas de género, empleo y poder, así como sobre procesos de transformaciones económicas y su impacto en la participación y en la equidad. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: *Las políticas sociales para la Cuba del 2030: elementos clave para su diseño e implementación* (2019) y *El cuadro socioestructural emergente de la 'actualización' en Cuba: Retos a la equidad social* (2020), en ambas como coautora.

e-mail: dayma@ceec.uh.cu

A partir de una perspectiva multidimensional, compleja y contextualizada de las desigualdades, y de una pluralidad de referentes disciplinares e institucionales, en la presente Colección se analizan las principales desigualdades e inequidades sociales existentes en la sociedad cubana actual en diferentes grupos sociales –género, color de la piel, etarios, socioclasista, discapacidad, territorio, ruralidad— y ámbitos —económico, vivienda/hábitat, participación social y cultural—, las intersecciones entre ellas, los fenómenos de pobreza, vulnerabilidad y marginación, así como los efectos de las políticas públicas en estos fenómenos. Como aspecto novedoso, desde el enfoque interseccional se analizan las desigualdades en grupos y ámbitos específicos y, además, se formulan propuestas de políticas de promoción de equidad y justicia social.

Títulos de la colección:

Desigualdades económicas e interseccionalidad

Desigualdades por color de la piel e interseccionalidad

Análisis interseccional de las desigualdades en Cuba 2008-2018

Desigualdades, ruralidad e interseccionalidad

Desigualdades, participación y consumo cultural

Desigualdades clasistas e interseccionalidad

Desigualdades, discapacidad e interseccionalidad

Desigualdades etarias e interseccionalidad

Pobreza, vulnerabilidad y marginación

Desigualdades territoriales e interseccionalidad

Desigualdades de género e interseccionalidad

Vivienda, hábitat y desigualdades

Políticas sociales y sus efectos en las desigualdades

Políticas de promoción de equidad y justicia social



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en Cuba

Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE



RED DE
POLÍTICAS
SOCIALES
UII



978-959-7226-72-7